



RETOS HUMANITARIOS 2017

INFORME COLOMBIA: RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

Comité Internacional de la Cruz Roja



CICR

 ICRCespanol

 @CICR_co

Producción:
Departamento de Comunicación CICR - Colombia

Coordinación:
Isabel Ortigosa

Redacción:
Isabel Ortigosa, Rebeca Lucía Galindo, Laura Aguilera Jiménez

Asesor de producción:
Diego Rojas

Con el apoyo de:
Clara Lorena Araújo, Faruk Saman, Wbeimar Cardona, María Sol Calderón, Jaime Casanova,
Juan Sebastián González, Andrés Monroy, César Echenique, Nazim Ayadat y Amparo Silva.

Diseño:
Elkin Restrepo Núñez
Infografías:
Dumar Alejandro Pedroza

PubliDirect SAS

Mapas:
Departamento Agua y Hábitat/GIS, CICR Colombia

Corrección de estilo:
Margarita Polo, Centro de Apoyo en Comunicaciones, CICR
Buenos Aires, Argentina

Impreso en Bogotá (Colombia) por Espacio Creativo

SEDE PRINCIPAL EN COLOMBIA - BOGOTÁ D.C.

Calle 76 # 10 - 02

(571) 313 86 30 Fax: (571) 312 82 82

www.cicr.org/co bog_bogota@icrc.org

© CICR, marzo de 2017



CICR

● Foto de portada: Vista del barrio Manizales en San Calixto, Norte de Santander. Crédito: Andrés Cortés

CONTENIDO



SITUACIÓN HUMANITARIA

6

Persiste incumplimiento de las normas humanitarias en Colombia

Durante 2016, el CICR registró 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios, mientras que en terreno se observaba la reconfiguración de actores armados. En este contexto cambiante, la Institución brindó apoyo a más de 152.000 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada.



VIOLENCIA ARMADA

14

La violencia armada sigue marcando las zonas más vulnerables del país

La violencia generada por fuera del conflicto armado también fue causa de las posibles infracciones de los principios humanitarios. En entornos urbanos como Medellín y Buenaventura, la población afectada vive entre el estigma y el temor.



DESAPARICIÓN

18

Esperar, el duelo diario para familias de desaparecidos

Determinar la suerte de los desaparecidos es una necesidad urgente. La dimensión del problema es tal en Colombia, que hoy se desconoce el paradero de 85.900 personas. Los obstáculos que encuentran los familiares son múltiples: desde la indiferencia, hasta la falta de respuesta integral a sus necesidades.



VIOLENCIA SEXUAL

24

El miedo silencia a las víctimas de violencia sexual

Cerca de 17.100 mujeres y niñas han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado desde los años 80. Para el CICR, es preocupante la recurrencia de este fenómeno y las carencias en la atención a las víctimas.



CONTAMINACIÓN POR ARMAS

30

Restos explosivos de guerra, un reto para las próximas décadas

La presencia de artefactos explosivos (restos de guerra y otros de fabricación improvisada) cerca de los entornos poblados, además de la proliferación de armas en zonas urbanas, son algunas de las amenazas que enfrenta la población civil en Colombia.



DETENCIÓN

34

Urden cambios drásticos en la política criminal colombiana

La crisis carcelaria en Colombia va mucho más allá del hacinamiento y de las pésimas condiciones que genera para los privados de libertad. En realidad, el país enfrenta otros grandes retos en el abordaje de la sobrepoblación de internos y el diseño de su legislación.





EDITORIAL

Colombia necesita ambición para responder a los retos humanitarios

En 2016, presenciamos un hecho histórico para Colombia: la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Antes, a partir del cese al fuego unilateral, en julio de 2015, el número de personas afectadas por el conflicto descendió de manera significativa, lo que da cuenta del impacto que tuvieron las decisiones tomadas en la Mesa de Conversaciones.

Desde el inicio mismo de las negociaciones, el CICR recomendó no esperar que concluyeran para tratar de aliviar las consecuencias humanitarias del conflicto. El interés de las partes por dar respuesta al drama de las víctimas se manifestó en la decisión de implementar el desminado humanitario, las medidas inmediatas para la búsqueda de personas desaparecidas y la elaboración de un protocolo para la salida de los menores de edad que están en las filas de las FARC-EP.

Sin embargo, esta buena voluntad no se ha traducido en avances suficientemente sustanciales a lo largo de los últimos meses. No hay excusa para postergar la implementación de lo acordado de manera pronta y eficaz. Es momento de aumentar el nivel de ambición y responder a estos retos humanitarios con la contundencia que amerita el drama de millones de víctimas que ha dejado el conflicto.

Pero la puesta en marcha del Acuerdo no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia. Construir un país en paz requiere del esfuerzo de todos y tomará décadas.

En nuestro rol de intermediario neutral, seguimos dispuestos a apoyar las negociaciones entre el Gobierno y el ELN que, de concretarse, ayudarían a aliviar la situación de las comunidades que aún no han visto el optimismo de la paz reflejado en su vida diaria. La expectativa que generan estos nuevos diálogos es crucial, pero no es el final del camino.

La violencia armada en entornos urbanos, el confinamiento al que están sometidas poblaciones enteras en zonas controladas por grupos armados, las amenazas, los desplazamientos intraurbanos y las víctimas del fuego cruzado, son solo algunas manifestaciones de una violencia que no cesa. Este es un creciente desafío en una sociedad que busca transitar de la guerra a la paz. Tenemos toda nuestra atención puesta sobre este fenómeno que provoca consecuencias humanitarias preocupantes.

Más de 40 años de presencia en Colombia nos dan razones para reforzar nuestro compromiso con las víctimas. Seguiremos trabajando junto a ellas, tanto en las zonas más remotas del país como en las ciudades en las que persisten las consecuencias de la violencia. Continuaremos recordando a todos los actores armados la importancia de respetar las normas y los principios humanitarios, con el anhelo de que los capítulos más tristes de la historia colombiana no se repitan.

Todos los días nos alienta ver la fuerza de personas que, a pesar de haber sufrido un conflicto tan prolongado como el colombiano, no pierden la esperanza de un futuro mejor en el que, por fin, todos entiendan que en la guerra no todo vale.

No hay excusa para postergar la implementación de lo acordado de manera pronta y eficaz.

Christoph Harnisch

Jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia

Persiste incumplimiento de las normas humanitarias en Colombia

Durante 2016, el CICR registró 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios, mientras que en terreno se observaba la reconfiguración de actores armados. En este contexto cambiante, la Institución brindó apoyo a más de 152.000 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada.



Andrés Cortés

● San Calixto, Norte de Santander. Los hogares de los sancalixtanos tienen marcas de esquirlas de granada y de otras municiones.

“Yo veo la paz muy lejos”, responde Johana cuando se le pregunta sobre su vida tras el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP. “Para nosotros no hubo calma ni cese del fuego. No supimos qué fue eso”, dice esta habitante de San Calixto, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde están presentes varios actores armados. A sus espaldas se puede observar que la pared de su casa, en la plaza principal del pueblo, está llena de agujeros que han dejado impactos de bala y esquirlas de granada.

A pesar de la indudable mejoría de la situación humanitaria del país, el sentimiento de esta madre de familia se repitió durante 2016 en muchas otras regiones de Colombia, donde el CICR documentó 838 posibles infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) y otros principios humanitarios que afectaron a más de 18.600 personas. La Institución vio con preocupación cómo el 40% de estos incidentes afectó a mujeres y menores de edad.

En el Catatumbo, el hogar de Divanid también muestra las secuelas del fuego cruzado. Se ven te-

jas rotas y huellas de disparos en la pared. Normalmente, cuando hay un enfrentamiento, ella toma a sus hijos y sale del pueblo por un tiempo. “Pero cuando no podemos irnos, nos quedamos debajo de la cama... ni modo”, dice recordando el tiroteo de agosto de 2016 que dejó a todo el pueblo aterrado. “Tenemos miedo de salir de la casa. Uno escucha una puerta que se cierra duro y piensa que es un bombardeo”, agrega Divanid.

Para quienes han pasado toda la vida en el Catatumbo, el optimismo que la paz genera en el resto de Colombia está limitado por los evidentes desafíos del día a día que enfrentan personas como Johana y Divanid. En esa, como en muchas otras regiones del país, la presencia de actores armados y sus efectos sobre la población civil mantienen a la comunidad en medio de una tensa calma que, cuando se rompe, le recuerda al país que el conflicto pudo haber terminado para unos, pero no para todos.

Por eso, la acción humanitaria del CICR no se ha detenido ni un segundo. El año pasado, 152.000 personas se beneficiaron del trabajo realizado tanto en las áreas más inaccesibles del país como en los complejos centros urbanos en los que también viven víctimas del conflicto y la violencia armada. No dar marcha atrás al deber de aliviar el sufrimiento del país es tan relevante hoy, como lo fue cuando llegamos a Colombia hace más de cuatro décadas.

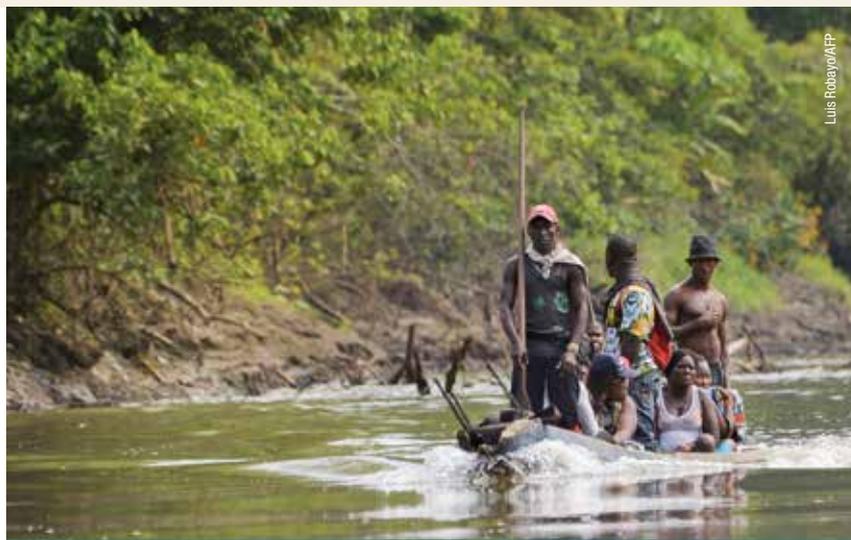
Perspectivas y retos para 2017

El cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las FARC-EP se reflejó en una importante reducción de las confrontaciones armadas. Algunas zonas del país que antes sufrían los efectos de constantes enfrentamientos hoy son testigos de una situación que ha mejorado significativamente.

Sin embargo, los avances en materia humanitaria requieren de más celeridad y acciones concretas para dar respuestas a las víctimas. Se necesita voluntad política constante para que los afectados por un conflicto tan prolongado reciban la respuesta y la atención que merecen.

Nuestra experiencia en el terreno nos indica que entre los desafíos más destacados para el país en los años venideros se cuentan los estragos de la violencia armada en zonas donde hay presencia de diferentes actores armados. Algunas áreas urbanas en las que trabajamos, como Medellín, El Bagre y Buenaventura, estuvieron entre las más golpeadas por este fenómeno.

Otra prioridad, vigente aún más allá de la firma del Acuerdo Final, es el esclarecimiento del paradero de miles de personas que han desaparecido, y que siguen desapareciendo hoy en día debido al conflicto y la violencia. Un agravante es que es imposible calcular la magnitud real del fenómeno. Mientras el Registro Nacional de Desaparecidos tiene documentadas a 24.900 víctimas de presunta desaparición forzada, un informe del Centro de Memoria Histórica asegura que son más de 60.600.



Luis Robayo/AFP

Chocó. Comunidades se movilizan por el río Baudó, zona donde hay presencia de varios actores armados.

En toda guerra quedan deudas sin saldar. Pero las desapariciones, así hayan ocurrido hace décadas, no deben quedar en el olvido. Ese es un deber no solo de los responsables y de las autoridades, sino también de todo el país. Es una obligación de cada colombiano ser solidario con las familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Entre las preocupaciones del CICR está también el silencio y el temor que rodean a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y la violencia, lo que se traduce en un significativo subregistro en la información. Tal y como lo expresan las víctimas que compartieron sus historias con la Institución, las cicatrices emocionales y físicas que deja esta práctica prohibida por el DIH no desaparecen nunca. Durante 2016 hubo alarma por casos de violaciones colectivas y sus efectos sobre varias generaciones: en ocasiones, abuelas, madres e hijas comparten la trágica historia de una agresión.

Otra consecuencia que aún sufren miles de personas en Colombia es la presencia de artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra. Este tipo de contaminación es un peligro latente en zonas urbanas y rurales que durante décadas han sufrido los efectos de la guerra.

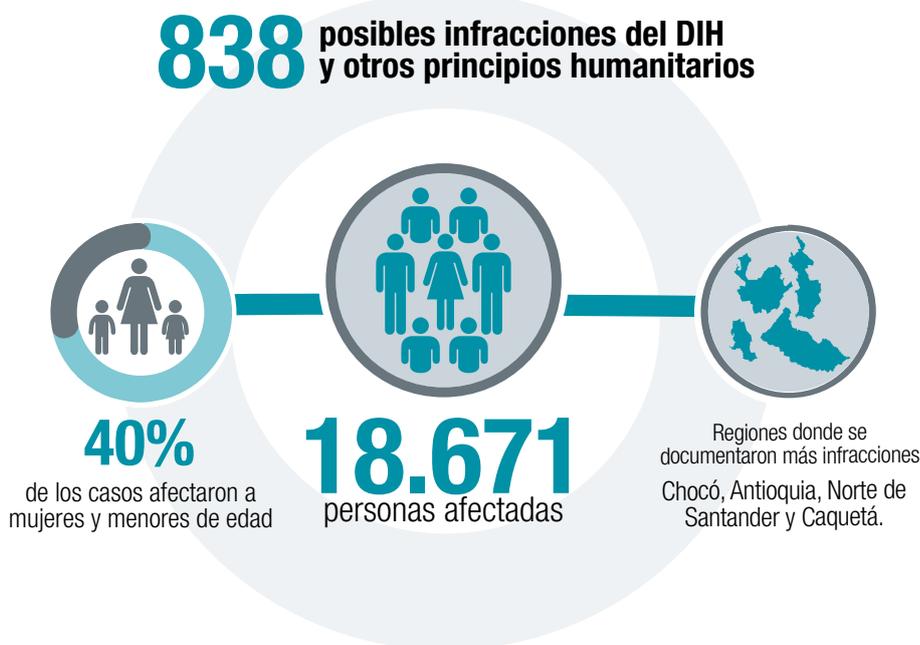
A pesar de que algunas regiones del país ya se han beneficiado de los programas de desminado, tomará décadas limpiar el territorio afectado. Además, no se cuenta con datos exactos de la dimensión y la ubicación de estas amenazas. A lo anterior se añade que las víctimas directas y sus familias necesitan apoyo y acompañamiento durante gran parte de sus vidas.

La realidad cotidiana en el terreno nos recuerda permanentemente que la presencia de estos artefactos es un reto vigente. El 26 de septiembre de 2016, el mismo día que el país era testigo de la ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP en Cartagena, un menor de edad murió y otro quedó herido mientras caminaban por una zona contaminada por artefactos explosivos en una vereda de Algeciras, Huila. Ante el desasosiego generado en un país donde cada paso puede ser un riesgo, es importante fortalecer la prevención y la ayuda humanitaria en favor de personas que han tenido que restringir su movilidad y modificar sus hábitos debido al temor a estos artefactos.

Se necesita voluntad política constante para que las víctimas de un conflicto tan prolongado reciban la respuesta y la atención que merecen.

INCUMPLIMIENTO de normas humanitarias en 2016

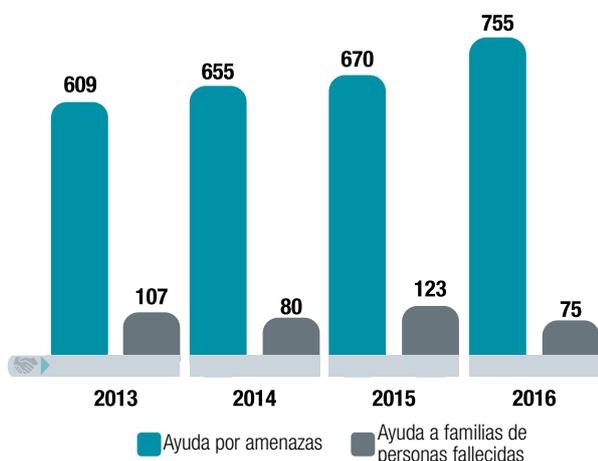
Balance de lo documentado por el CICR en las 22 zonas donde concentra sus actividades. No todos estos incidentes sucedieron durante 2016 ni deben ser interpretados como una tendencia nacional.



Una infracción del derecho internacional humanitario u otros principios humanitarios es una violación a normas como la protección de la población civil. Entre los casos más graves están el desplazamiento, la violencia sexual, los homicidios en personas protegidas, o la tortura, que son considerados crímenes de guerra y no son amnistiables. El CICR habla siempre de 'posibles' infracciones porque no es parte de su rol investigar ni juzgar a los culpables de estos hechos.

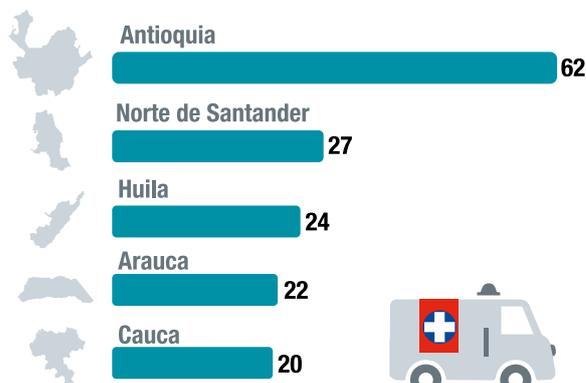
Víctimas de muertes y amenazas necesitan apoyo constante

Durante 2016 seguimos ayudando a quienes han sido amenazados y han tenido que huir de sus hogares en búsqueda de un lugar seguro, así como las familias de personas que fallecieron en el marco del conflicto y la violencia armada.



232 infracciones e incidentes pusieron en riesgo el trabajo de la Misión Médica en 2016

Regiones donde la Misión Médica fue más afectada



Fuente: CICR Colombia. Los datos reflejan los casos documentados por el CICR en las zonas donde concentra su trabajo y no corresponden necesariamente a tendencias nacionales de registros de víctimas.



Voces de las víctimas

Por último, una problemática humanitaria que debe ser abordada con urgencia por el Estado colombiano es la crisis del sistema carcelario. Durante 2016, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en Colombia no mejoraron sino que, en ocasiones, empeoraron, lo que deja en evidencia la falta de voluntad del Estado a la hora de hacer frente a sus obligaciones con los más de 119.500 detenidos que tiene el país.

Más allá del papel

“La paz no es solo dejar las armas. El Estado debe apoyar a la población civil. Aquí no tenemos vías ni acueducto, no hay trabajo, no hay empleo, eso genera violencia”, nos dijo un líder comunitario en Arauca que prefirió mantener su nombre en reserva. “¿Qué va a pasar con nosotros?”, preguntó. Esa duda la comparten muchas otras comunidades con las que trabajamos durante 2016.

El año 2017 marca también el inicio de la fase pública de las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un acercamiento valioso en el que las preocupaciones humanitarias deberían ocupar el protagonismo de la agenda.

En las discusiones que Colombia debe afrontar como país, el CICR hace un llamado para poner el foco de atención sobre las víctimas y sobre los cambios urgentes que se necesitan en las zonas históricamente afectadas por el conflicto. La indiferencia colectiva hacia ellas puede convertir la paz en una promesa frágil.

Mientras la violencia armada siga siendo una realidad y las hostilidades sigan afectando a los civiles, continuaremos dialogando con todas las partes en conflicto para evitar posibles infracciones humanitarias como las que vimos en 2016. Apoyamos día a día a las personas más afectadas por esta violencia, como Johana, en el corazón del Catatumbo, que solo tuvo un deseo cuando le preguntamos sobre sus expectativas para el futuro: “Pido que se nos escuche, para que estas cosas no solo se queden plasmadas en papeles”.

Nuestro rol en el Acuerdo de Paz

Tras más de cuatro años de conversaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, vimos con agrado que, en medio de la discusión política, fue posible incluir asuntos humanitarios.

Durante este tiempo, hemos participado de forma neutral e independiente en aspectos logísticos que apoyaron el desarrollo de los diálogos y la implementación de acciones concretas sobre el terreno, como la entrega de los menores de edad que estaban en las filas de las FARC-EP.

Además, tenemos un rol en el acuerdo humanitario para acelerar la búsqueda de los desaparecidos. Trabajamos con ambas partes para obtener información que permita la ubicación, identificación y entrega digna de estas personas.

Continuaremos trabajando para agilizar y recibir más respuestas a las necesidades de las víctimas. Tras más de cinco décadas de confrontaciones, queda un largo camino por delante.

“**Esta guerra es absurda** porque somos los mismos colombianos. Unos tienen sus ideales, otros su sistema, pero los que más sufren son siempre los civiles. Las cosas han sucedido, muchos han muerto, y nada ha mejorado”.

Aristides, Arauca

“Mis dos hermanos fueron asesinados. Mis tíos, y mis primos también han muerto. Es difícil **recordar tantos momentos agrios** que uno pasa acá. Quiero que mis hijos vivan una libertad que yo no he podido vivir”.

Divanid, Norte de Santander

“Luego de los combates **quedaban municiones sin explotar en los campos**. Ahora tenemos un lugar seguro para la comunidad y el riesgo se reduce por las capacitaciones que nos dio el CICR. Gracias a eso nos quedamos en nuestras tierras”.

Mario, Cauca

“Nos sacaron con nuestros hijos a sufrir. No tenemos un plátano, no tenemos qué echarle a la olla. **Tuvimos que salir a pedir**, porque no tenemos dónde trabajar”.

Felisa, indígena desplazada en Arauca



Wheimar Cardona / CICR

© Vereda Caño Ánimas, Vista Hermosa, Meta. El CICR intervino para recuperar la estructura dañada de esta escuela rural.

El DIH sigue vigente en el posacuerdo

Si bien el derecho internacional humanitario (DIH) se aplica a las partes en un conflicto armado, estas normas pueden tener vigencia aún tras la firma de un Acuerdo de Paz. Además, el Estado colombiano sigue en conflicto con varios actores armados: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Ejército Popular de Liberación (EPL).

El conflicto con las FARC-EP entró en una fase de terminación con el Acuerdo Final, y culminará cuando no haya riesgo de reanudación de las hostilidades y se concrete el desarme de los combatientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las disidencias de las FARC-EP podrían ser una fuente de nuevos conflictos.

Por otro lado, las partes tienen obligaciones derivadas del DIH más allá del fin de las hostilidades, como el desminado del territorio, la búsqueda de las personas desaparecidas o el deber de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra. En este contexto, la ayuda humanitaria seguirá siendo importante para salvar vidas en comunidades que sufren las consecuencias de la violencia.

Por lo tanto, el CICR evita referirse a este momento histórico del país como "posconflicto" y prefiere la expresión "posacuerdo". Considerar el conflicto como algo superado exigirá tiempo, recursos considerables y la voluntad política de todas las partes.



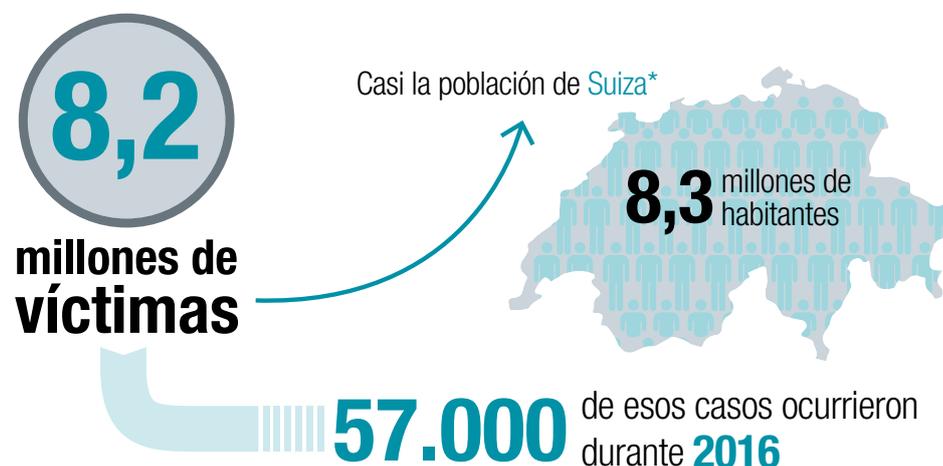
Faruk Saman González/CICR

© Después del cese del fuego y un Acuerdo de Paz, las partes siguen teniendo obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario.

El Estado colombiano sigue en conflicto con varios actores armados: ELN, AGC y EPL.

SANAR LAS HERIDAS de millones de personas tomará décadas

Datos del Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos ocurridos desde 1985



Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), con corte al 1ero de diciembre de 2016.
*Naciones Unidas (www.esa.un.org) con corte al 31 de diciembre de 2016.

El impacto de 366 días de TRABAJO



DESDE EL TERRENO

Caravanas humanitarias durante movilizaciones sociales



Diego Alejandro Bravo / Cruz Roja Colombiana

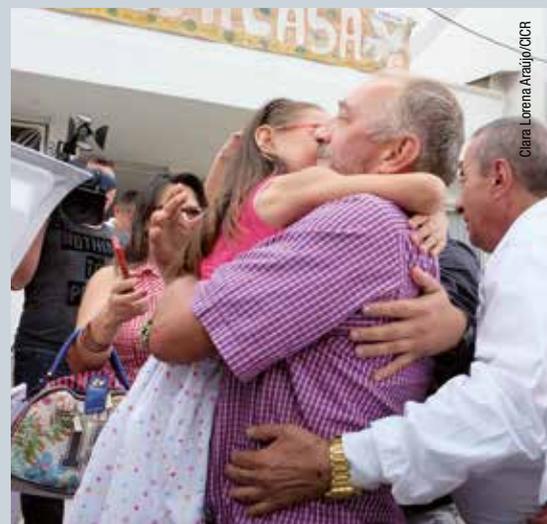
☉ Boyacá. La respuesta inmediata fue clave para responder al desabastecimiento de centros médicos.

Durante las movilizaciones sociales que vivió el país a mediados de 2016, instituciones de salud de Cauca, Boyacá y Nariño sufrieron de desabastecimiento de insumos médicos básicos. En respuesta a la emergencia, el CICR y la Cruz Roja Colombiana trabajaron juntos para organizar caravanas humanitarias con oxígeno, medicamentos y unidades de sangre, entre otros artículos.

Una situación similar se vivió en los municipios caqueteños de Valparaíso, El Paujil y Doncello durante las manifestaciones del tercer trimestre del año pasado. En estos lugares, el CICR apoyó a los hospitales locales y brindó orientación y asistencia económica para que las personas que resultaron heridas pudieran acceder a los servicios de salud y rutas de atención.

Todas estas coyunturas sirvieron para recordar a las autoridades y a los líderes sociales los límites sobre el uso de la fuerza, además de la importancia de respetar a la Misión Médica y de proteger a los trabajadores de la salud que salvan vidas todos los días.

Liberaciones aliviaron el sufrimiento de las familias



Clara Lorena Araujo/CICR

☉ Civil liberado el 6 de octubre de 2016 en zona rural de Saravena, Arauca.

Durante 2016

27 personas



que estaban en poder de grupos armados volvieron a ver a sus seres queridos gracias a la intermediación neutral del CICR. Desde 1994, los buenos oficios de la Institución han facilitado la liberación de más de 1.620 civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Nuestra acción humanitaria

Durante 2016, nuestro trabajo en zonas afectadas por el conflicto y la violencia armada benefició a 152.000 personas. Estos son algunos de los resultados de un intenso año de trabajo realizado, en muchas ocasiones, en conjunto con la Cruz Roja Colombiana.



Olivera Datchary/ICR

● Norte de Santander. Campesinos de la vereda Aguadas mejoraron la producción de sus cultivos de tras recibir abono orgánico, insumos y entrenamiento técnico.

Orientamos y asistimos

✓ **1.770** niños y niñas 

de escuelas afectadas por enfrentamientos estudian en mejores condiciones gracias a la reparación o construcción de instalaciones escolares como aulas, albergues, baños y comedores.

✓ **750** personas 

amenazadas por actores armados recibieron apoyo para trasladarse a lugares más seguros.

✓ **770** víctimas 

del conflicto recibieron apoyo psicosocial y psicológico.

✓ **3** comunidades 

que han vivido en medio del conflicto en Cauca, Caquetá y Norte de Santander tienen un mejor servicio médico tras el mejoramiento de los puestos de salud donde se pueden atender 84 consultas al día.

✓ **130.000** personas 

en más de 30 municipios se beneficiaron del soporte técnico dado a las instituciones oficiales encargadas de atender a las víctimas del conflicto.

Apoyamos la seguridad económica

✓ **5.900** víctimas 

del desplazamiento y la violencia mejoraron sus ingresos tras recibir formación para el trabajo, apoyo para obtener un empleo formal o recursos para fortalecer sus negocios.

✓ **7.600** personas 

en su mayoría campesinos que habitan zonas afectadas por el conflicto y la violencia, mejoraron la producción de alimentos.

✓ **4.470** personas 

que viven en zonas afectadas por el conflicto recibieron alimentos y elementos para el hogar.



Feruk Saman González / CICR

☉ Chocó. Comunidades del río San Juan afectadas por la violencia e inundaciones recibieron ayuda humanitaria de emergencia. La intervención benefició a 1.900 personas afectadas, la mayoría indígenas wounaan y afrocolombianos.

Capacitamos

✓ **6.100** trabajadores 

de la salud y de entidades estatales recibieron capacitaciones sobre derechos y deberes de la Misión Médica y las normas de seguridad que deben seguir en zonas de conflicto.

✓ **1.900** miembros 

de la Fuerza Pública y autoridades penitenciarias se formaron en estándares internacionales de uso de la fuerza y normas humanitarias.

✓ **2.600** personas 

entre autoridades y líderes comunitarios, se formaron para dar una mejor atención y acompañamiento a las víctimas del conflicto.

✓ **2.080** miembros 

de comunidades, personal sanitario y autoridades fortalecieron su capacidad para salvar vidas a través de entrenamiento en Primeros Auxilios y atención de heridos.

✓ **90** profesionales 

de rehabilitación física dan un mejor servicio a pacientes con discapacidad tras recibir formación complementaria.

COLOMBIA, la operación CICR más grande de América



La violencia armada sigue marcando las zonas más vulnerables del país

La violencia generada por fuera del conflicto armado también fue causa de las posibles infracciones de los principios humanitarios. En entornos urbanos como Medellín y Buenaventura, la población afectada vive entre el estigma y el temor.



Isabel Orjosa/CICR

● Buenaventura. El CICR brinda apoyo a las comunidades afectadas por situaciones de violencia por fuera del conflicto armado en zonas urbanas y rurales.

Muy pocos viven para contar esto. “Uno de los muchachos se acercó a mí y se dio cuenta de que yo no estaba muerto porque respiraba, por eso me golpearon y me dieron en la mano con el machete varias veces; me dolía muchísimo. Empezaron a picarme en vida. No podía moverme, hasta que vino otro y me dio otro machetazo en la cabeza, en la parte de atrás; creo que querían sacarme la cabeza”.

Lo llamaremos “David” porque su vida aún está en peligro. El año pasado, este joven que cursaba séptimo grado sobrevivió al ataque en una zona urbana del Valle del Cauca, cerca del barrio donde suele encontrarse con sus amigos. El grupo de muchachos armados que intentaba asesinarlo salió corriendo del lugar cuando escucharon ruidos en una casa cercana. David empezó a gritar de dolor hasta que las personas que estaban cerca lo escucharon y lo llevaron a una clínica.

Perdió la mano derecha y tiene las marcas del ataque en el cuerpo. No ha vuelto a la escuela ni a su ciudad. “Cuando me veo las cicatrices me duele, pero no es dolor físico, sino dolor del alma. No voy a ser el mismo, aunque hay un psicólogo que me está ayudando. Él me dice que saldré adelante, pero no sé cómo”, dice David.

Aunque escenas como esta parecen escritas para una película de terror, la realidad de las víctimas en Colombia supera todo tipo de ficción. La historia de David es la de muchos otros colombianos. Durante 2016, el CICR documentó posibles infracciones de los principios humanitarios que ocurrieron en cascos urbanos o como resultado de la violencia armada. Las zonas urbanas donde el CICR registró más casos fueron Medellín, El Bague y Buenaventura.



Voces de las víctimas

“Tengo mucho **temor de regresar a mi ciudad** porque estoy solo en la vida. Los muchachos que me hicieron esto siguen allí y tengo miedo de que me busquen”.

David, víctima en Valle del Cauca

“La inseguridad aquí está muy dura. En el barrio de mi mamá es peor. Allí no se puede hacer nada. Para todo lo que se mueve **hay que pedir permiso**”.

Johana, microempresaria de Tumaco

Aunque el crecimiento del número de víctimas del conflicto y la violencia ha menguado, no se ha detenido. En solo cuatro años, el Estado registró cerca de 302.000 víctimas de bandas armadas organizadas tras las decisiones de la Corte Constitucional que obligan su reconocimiento (Sentencia C280 y Auto 119 de 2013).

En el terreno, el CICR ha sido testigo del irrespeto de los principios básicos de humanidad. Persiste y preocupa la vinculación de menores de edad a grupos armados, la violencia sexual, los desplazamientos intraurbanos, el confinamiento de los civiles debido a fronteras invisibles y las desapariciones. El hecho de que el número de víctimas del conflicto armado no esté en el mismo nivel de hace cinco años nunca debe ser una excusa para ignorar este gran desafío.

Tentáculos del miedo

Sus palabras salen como un susurro tímido, como si las paredes tuvieran oídos.

“Anoche se armó un tiroteo. Yo estaba muy nerviosa, pero nos quedamos calladitos, sin hablar. A uno hasta le da miedo encender el bombillo”. Luz Marina mantiene un tono de voz bajo por un rato, algo nada típico en esta mujer extrovertida que suele sonreír con todos los dientes. Su madre está sentada a su lado. Cuando le preguntan si ha pensado en irse de Tumaco, responde: “Pero ¿para dónde vamos a agarrar? No tenemos a dónde ir”.

Sostenidos sobre el mar con palos de madera, los coloridos palafitos en los que vive Luz Marina han sido escenario de muertes de las que nadie se atreve a hablar y, en ocasiones, de una tensa calma en la que pocos confían.

Mientras avanza la implementación del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de la violencia cambiante y plagada de incertidumbres.

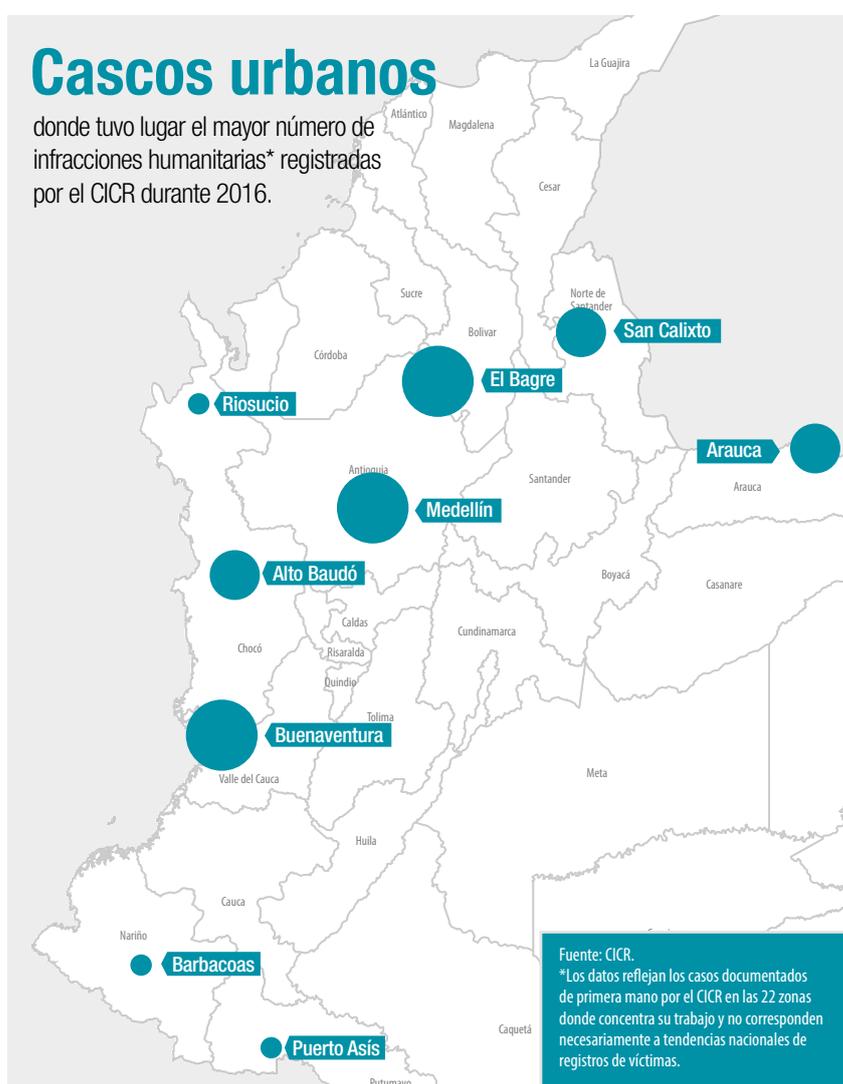
Enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además del accionar de “combos” y pandillas, ponen en evidencia que mantener la promesa de la paz será un camino difícil durante 2017. Para el CICR sigue siendo un desafío reforzar un diálogo con actores armados de naturaleza más volátil para insistir en el respeto de los principios humanitarios.

Asimismo, se han observado complejas formas de violencia en Chocó, donde la mayoría de la población es afrodescendiente o indígena. En este departamento, los trabajadores del CICR han sido testigos de que vivir en condiciones dignas es un lujo de pocos, en especial para la población que habita en zonas de influencia de grupos armados.

En zonas que rodean el río San Juan, en el sur del Chocó, esta tragedia humanitaria es una mezcla de factores conectados entre sí: fuentes de agua contaminadas por la minería, escasas alternativas frente a la producción de droga, hambre y enfermedades derivadas de la pérdida de cultivos, nulo acceso a la salud, confinamiento, senderos contaminados con artefactos explosivos, aislamiento y ausencia estatal.

El miedo no es invisible, tiene efectos reales. Para madres y padres de las zonas del país que son víctimas silenciosas de la violencia armada, sacar adelante a una nueva generación en medio de estas condiciones adversas es una prueba de valentía. “Uno no les puede explicar nada a los niños. ¿Para qué?, si ellos mismos lo están viviendo todo. Lo único que podemos hacer es encerrarlos temprano en la casa. A las seis de la tarde se tranca la puerta y quedamos guardaditos”, concluye Luz Marina.

La reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de la violencia cambiante y plagada de incertidumbres.



¿A qué llamamos 'violencia armada'?

La violencia armada es distinta a la violencia generada por hechos de delincuencia común, como es el robo de un celular. Se trata de acciones no vinculadas directamente al conflicto armado, sino a los enfrentamientos y al accionar de actores armados organizados, "combos" y pandillas. La violencia armada tiene consecuencias humanitarias graves para la población como el confinamiento, la violencia sexual, el reclutamiento de menores de edad y el desplazamiento, entre otros.



Rebeca Lucía Gairaldó/CICR

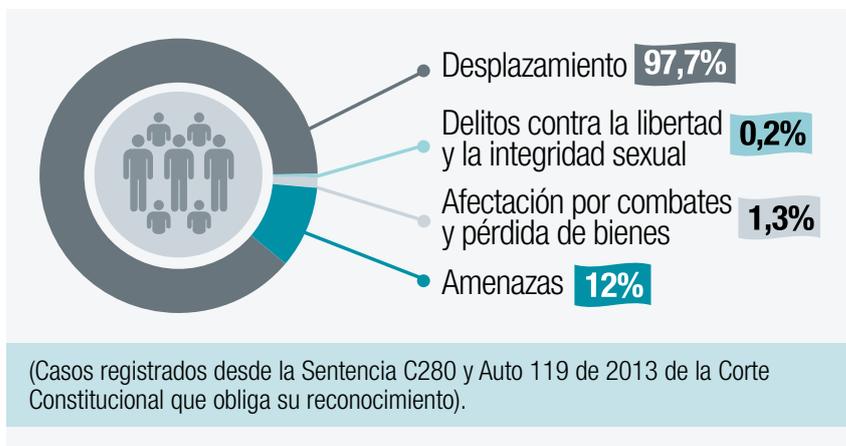
☉ Tumaco. La violencia en centros urbanos es un desafío en varias ciudades del país.

El impacto de la violencia

Desde 2013 hay registro de

301.900
víctimas

de actores armados organizados



Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), con corte al 1ero de diciembre de 2016. *Una víctima puede reportar varios hechos

Retos de la doctrina de la Fuerza Pública

A mediados de 2016, el Estado comenzó a implementar una normativa del Ministerio de Defensa llamada "Directiva 015" para combatir a "grupos armados organizados" (Autodensas Gaitanistas de Colombia/"Clan del Golfo", Ejército Popular de Liberación/"Pelusos" y "Puntilleros") con fuerza militar en el marco de las normas de DIH que regulan la conducción de hostilidades (lo que puede incluir bombardeos aéreos).

La militarización explícita de estos casos conlleva también una serie de obligaciones universales, como la protección de la población civil y de los combatientes heridos, y de prohibiciones como la de no causar daños desproporcionados. Por otro lado, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos en todo momento.

Por esas razones, la doctrina, los procedimientos y el entrenamiento de la Fuerza Pública sobre el uso de la fuerza debe fortalecerse en momentos en los que el conflicto armado muta con rapidez.

Colombia comparte este desafío con gran parte de la región



Isabel Ortigosa/CICR

☉ Buenaventura ha sido uno de los municipios del Pacífico más afectados por la violencia armada.

Debido al impacto corrosivo de la violencia, no necesariamente vinculada a un conflicto armado, millones de personas en América Latina quedan relegadas de los servicios básicos de salud y educación, así como del desarrollo económico que pueden ofrecer sus ciudades.

Por eso, el CICR trabaja en países de la región que enfrentan retos similares a los de Colombia. En Ciudad Juárez (México) y en varias ciudades de Centroamérica, el CICR tiene un diálogo constante con las autoridades y brinda asistencia humanitaria para ofrecer alivio a las poblaciones más vulnerables a la violencia.

DESDE EL TERRENO

Huerta urbana une a un barrio estigmatizado

“¡Ánimo! ¡Vamos!... ¡unos tomates bien lindos!”, le dice María Victoria a las plantas del invernadero de su barrio. Este edén que huele siempre a tomates verdes está ubicado en el sector de La Loma, en las afueras de Medellín, y es producto de meses de trabajo de los vecinos con el apoyo técnico del CICR.

María Victoria es una de las vecinas que ha logrado mejorar su economía con este proyecto de agricultura orgánica desde el principio. Ya han podido vender y alimentarse de tomate, cebolla y cilantro.

La zona ha estado marcada por la violencia, lo que ha generado la estigmatización de sus habitantes y la consecuente dificultad para tener mejores alternativas de subsistencia. Con estos cultivos, la comunidad ha tenido la oportunidad de trabajar junta y tener una fuente de ingresos adicional. “También nos enseñó a tener paciencia para disfrutar de estas plantas tan bellas”, opina Ramiro.



La Loma, afueras de Medellín. Vecinos se unieron en torno al cultivo de vegetales orgánicos.

Nuestra acción humanitaria frente a la violencia armada en 2016

Tanto las víctimas que se desplazan hacia centros urbanos como la población residente sufren los efectos de la violencia y necesitan apoyo. Por eso, desplegamos nuestra labor junto con la Cruz Roja Colombiana.

4.900 víctimas 

del desplazamiento y la violencia mejoraron sus ingresos tras recibir capacitación y/o apoyo para obtener empleo formal.

5.000 habitantes 

de barrios de Buenaventura afectados por la violencia cuentan con una infraestructura comunitaria más segura en la que se pueden reunir.

980 personas 

que viven en cascos urbanos mejoraron la productividad de sus negocios gracias al programa de apoyo que realizamos en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Cruz Roja Colombiana.

260 familias 

que han sido afectadas por el conflicto y la violencia en Medellín tienen mejores herramientas para sacar sus proyectos productivos adelante o acceder a un empleo formal.



Tumaco. La ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas por la violencia armada continuó durante 2016.

Esperar, el duelo diario para familias de desaparecidos

Esclarecer la suerte de los desaparecidos es una necesidad urgente. La dimensión del problema es tal en Colombia, que hoy se desconoce el paradero de 85.900 personas. Los obstáculos que encuentran los familiares son múltiples: desde la indiferencia, hasta la falta de respuesta integral a sus necesidades.



◉ Inspirada en la historia real de una familia colombiana oriunda del Guaviare, la historieta "La sombra de Enrique" contó el drama de la desaparición y fue traducida a nueve idiomas.

"Aunque haya tratados de paz, a nosotros el conflicto armado nos dejó algo marcado para siempre", dice Juan Joven. En las manos tiene un cuaderno lleno de poemas y canciones, muchas en memoria de Jaime, el hermano mayor que vio por última vez hace catorce años, cuando lo desapareció un grupo armado en zona rural del Putumayo.

Jaime está entre las miles de personas en Colombia que hoy esperan a un ser querido. Aunque se abre una nueva página en la historia del país, la de la reconcilia-

ción nacional, para las familias de los desaparecidos es difícil superar la incertidumbre. Mientras el país trata de dejar la guerra en el pasado, el sufrimiento de los familiares sigue presente.

El camino de la reconciliación pasa por reconocer el derecho a saber que tienen los familiares. Más allá de la firma del Acuerdo de Paz, todas las partes tienen una obligación que permanece en el tiempo. Averiguar lo sucedido con las personas desaparecidas y prevenir nuevos casos no es un gesto de buena voluntad, es un deber.



© Putumayo. Juan Joven compone coplas y poemas en memoria de su hermano Jaime. Dice que el canto lo ayuda a sanar.

Cuando el Gobierno y las FARC-EP se comprometieron a buscar a los desaparecidos en el marco del conflicto, el CICR saludó el acuerdo y apoyó este proceso. Ese compromiso por ayudar a averiguar lo ocurrido con los desaparecidos es una prioridad más viva que nunca para la Institución.

Sin embargo, el desafío es inmenso. Durante 2016, cada día se reportaron, en promedio, 29 casos antiguos y recientes de personas desaparecidas en Colombia, tanto por el conflicto armado como por otras situaciones. En total, hoy no hay información del paradero de 85.900 personas (ver gráfico p. 20).

La falta de documentación centralizada, la escasa coordinación entre las instituciones responsables y el subregistro de casos hace que no existan cifras consolidadas sobre las personas que desaparecieron en el marco del conflicto. Mientras que el Registro Nacional de Desaparecidos incluye a cerca de 24.900 víctimas directas de desaparición forzada, según el Centro de Memoria Histórica serían 60.600.

El país nunca podrá aprender de su pasado si olvida la dimensión de esta tragedia. Por eso, es importante recordar que los familiares de los desaparecidos también son víctimas, y que muchos aún tienen miedo de hablar y buscar ayuda. “Esta es una pesadilla sin fin”, dice Juan.

Barreras para encontrar respuestas

En nuestro diálogo constante con las familias de los desaparecidos, hemos podido constatar que aún existe una indiferencia perturbadora hacia el dolor que genera esta tragedia humanitaria.

Tras décadas de trabajo en Colombia, hemos conocido a personas que, ante una deficiente respuesta estatal, buscan a sus seres queridos por su cuenta. Asumen por sí solas el peso económico de la búsqueda y en ocasiones se adentran a zonas de con-

flicto. Ese fue el caso de María Nury, quien viajó por las selvas del Guaviare para buscar a su hijo mayor, desaparecido desde hace veinte años. “Muchas veces tuve miedo de terminar desaparecida en esas búsquedas. Pero yo no les demostraba miedo cuando me encontraba a gente armada. Solo le pedía a Dios que me permitiera volver a ver a mis hijos que se habían quedado solitos en la casa”, cuenta.

La tragedia de la desaparición también obliga a muchos a desplazarse para encontrar un lugar más seguro y, por consiguiente, a abandonar sus empleos y sus raíces. Como resultado, estas familias viven en condiciones económicas cada vez más frágiles, con profundas huellas psicológicas.

El camino para dar respuesta a los que esperan tomará mucho tiempo y está lleno de obstáculos. Los funcionarios responsables necesitan formación permanentemente para brindar orientación adecuada y trato digno a los familiares de los desaparecidos. “Cuando puse la denuncia, ellos me hacían las mismas preguntas varias veces. Yo siempre me atacaba a llorar y me ponía mal. Nunca obtuve respuesta de nada”, cuenta María Nury sobre la experiencia de buscar ayuda en varias entidades estatales.

Para aliviar con urgencia el sufrimiento que causa la desaparición, la sociedad debe tomar conciencia y ser solidaria con las víctimas y sus familiares. Cuando el país deje de ver a los afectados como “los otros” y comience a entenderlos como parte de la historia colectiva, se podrá dar un paso adelante y empezar a asumir esa gran deuda de solidaridad.

Las familias nunca olvidan a sus ausentes y, como nación, Colombia tampoco debe olvidar el dolor que corroe a gran parte de sus habitantes. Hacer oídos sordos a este llamado equivale a desaparecer a estas víctimas de nuevo.

Averiguar lo sucedido con las personas desaparecidas y prevenir más casos no es un gesto de buena voluntad, es un deber.

La dimensión INCIERTA

Estas cifras no representan la magnitud total de la desaparición en Colombia. Muchos casos nunca han sido reportados por falta de acceso de las familias a las autoridades o por el temor de hablar sobre lo que pasó.



No hay datos definitivos sobre desaparición forzada



Documentadas por el Registro Nacional de Desaparecidos son desapariciones presuntamente forzadas

Sin embargo

EL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

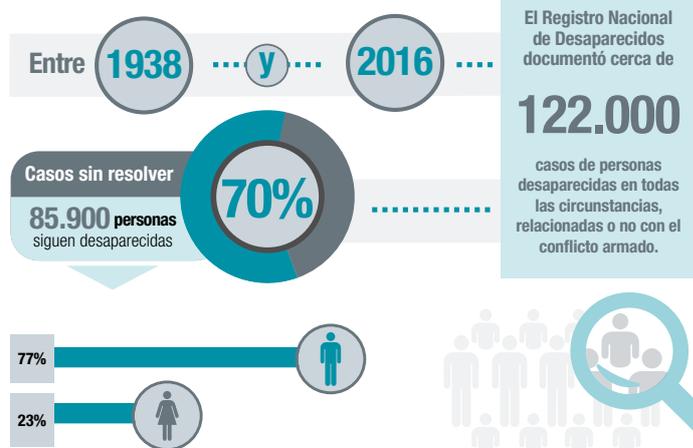
INFORMÓ DE



casos de desaparición forzada entre 1970 y 2015



de estas personas siguen desaparecidas



Fuentes: Medicina Legal, Localización de Información Forense Estadística con corte al 14 de febrero de 2017. Informe 'Hasta encontrarlos' Centro de Memoria Histórica (2016).
*No todas las personas desaparecieron durante el mismo año que se hizo el registro. Muchos casos ocurrieron antes de 2016 pero se reportaron después.

DESDE EL TERRENO

“No se perdió un bulto de papas, ¡se perdió mi hijo!”

“Mami, ya vengo” fueron las últimas palabras que Nohemí Agudelo escuchó de su hijo Cristian. “Pero ese ya vengo, no fue posible, no lo volví a ver”, recuerda ahora, diez años después de que él desapareció a pocas cuadras de su casa en Florencia, Caquetá. Tenía dieciséis años.

Algunos vecinos dicen que lo vieron subirse a un taxi. Otros, que lo subieron a una camioneta, pero nadie le ha dado respuestas sobre los responsables y las razones por las cuales él no volvió a casa ese día. “¡No se perdió un bulto de papas, se perdió mi hijo!”, dice Nohemí al relatar que muchos respondieron con indiferencia cuando pidió ayuda.

Tras recibir apoyo psicológico y volverse una activa integrante de una asociación de familiares de desaparecidos, Nohemí no pierde la esperanza de encontrarlo, vivo o muerto. “A nosotros, como víctimas, nos tienen que dar razón. Tenemos derecho a saber lo que pasó”, concluye.



© Florencia, Caquetá. El hijo de Nohemí desapareció muy cerca de su casa hace diez años. Era menor de edad.

DESDE EL TERRENO

Redes de apoyo

Damos respuesta a las necesidades expresadas por los familiares de los desaparecidos a través de jornadas de apoyo que hoy están ayudando a 60 personas a tener una red de solidaridad en San José del Guaviare, Villavicencio y Cali. “Con estas actividades he aprendido que no tengo que dejarme llevar por la tristeza”, dice César, quien hace parte de uno de los grupos.



Wibemar Cardona/CICR

☉ San José del Guaviare. En 2016, familiares de desaparecidos hicieron parte de una serie de actividades colectivas facilitadas por el CICR y la Cruz Roja Colombiana.

El mito de las 72 horas



Rebeca Lucía Galindo/CICR

☉ María Nury no tiene noticias de su hijo mayor desde hace más de dos décadas. Tenía catorce años cuando desapareció en el Guaviare.

Una desaparición puede reportarse de inmediato. Ninguna autoridad puede exigir la espera de un tiempo específico (24, 48 ni 72 horas) para recibir el reporte de una desaparición.

El CICR recomienda que se usen los mecanismos de búsqueda existentes como el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), que puede ayudar a prevenir más casos de desaparición. Para activarla, la solicitud puede presentarla cualquier persona directamente (o a través del Ministerio Público) ante un funcionario judicial (juez o fiscal), quien no puede negarse a considerar inmediatamente la solicitud.



Voces de los familiares

“La búsqueda de mi hijo se muere **cuando yo me muera**”.

María

“Yo creo que **paz** no va a haber porque las víctimas seguimos esperando”.

Carolina

“**Duré más de veinte años sin decir nada** por temor, pero es el momento de empezar a hablar. Hoy siento que podré tener noticias de mi hija. Siempre he tenido la esperanza de que está viva”.

César

“**Parece que estuviera de viaje** y que algún día va a llegar. Ese río es profundo y nadie sabe cuántos han desaparecido”.

Viviana

“Yo no quería nada, **muchas veces solo quería suicidarme**. Recibí terapias psicológicas y ahora quiero vivir y anhelo que algún día mi hijo aparezca”.

Elsa

“No es verdad eso que dicen: ‘cuando cuentas esta historia y no llores, es porque te has curado’. **Quiero saber la verdad**, no vivo en paz”.

Ruth

“A uno le queda **ese dolor, ese rencor**. Es tanta la desesperación que uno no sabe para dónde correr”.

Cecilia

#AquíFaltaAlguien pidió acabar la indiferencia



Andrés Moreno/CICR

☉ Puerto Asís. Ruth y su esposo no tienen noticias de su hijo Jairo desde hace 10 años, cuando salió hacia Puerto Colombia.

El 30 de agosto de 2016, cuando se conmemoró el Día Internacional de los Desaparecidos, el CICR lanzó la campaña #AquíFaltaAlguien para hacer un llamado público en favor de los familiares de personas desaparecidas.

A través de actividades en más de diez ciudades, y con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, se llamó a los colombianos a insistir en el trato digno a las víctimas y en la búsqueda urgente de los que faltan. Este año continuarán los esfuerzos para promover la solidaridad y la toma conciencia entre más personas.



Rubén Darío Jiménez/CICR

☉ Familiares que tienen un ser querido desaparecido llenaron la plaza de Puerto Asís, Putumayo, con dibujos y mensajes.



HECHOS Y CIFRAS

Nuestra acción humanitaria frente a la desaparición en Colombia

En 2016 acompañamos y ayudamos a muchas familias a sobrellevar la incertidumbre de tener a un ser querido desaparecido. Aún queda mucho trabajo por delante.

✓ **540** familiares 

de personas desaparecidas fueron orientados por el CICR y recibieron apoyo económico para continuar con la búsqueda y las gestiones para obtener reparación.

✓ **17** cuerpos 

de personas que fallecieron en zonas de conflicto fueron recuperados y entregados a las autoridades para su identificación.

✓ **230** familiares 

recibieron atención psicológica, apoyo psicosocial o participaron en jornadas de acompañamiento colectivo desarrolladas en cooperación con la Cruz Roja Colombiana.

✓ **280** funcionarios 

públicos y expertos forenses se capacitaron para dar una mejor atención a los familiares de los desaparecidos.

✓ **460** bóvedas 

y osarios comenzaron a utilizarse en el cementerio de Buenaventura para sepultar los cuerpos de personas no identificadas.

✓ **36** familias 

restablecieron el contacto con un ser querido del que no tenían noticias.



Amira Keiler/CICR

☉ Zona rural de Santander. El CICR continuó con su trabajo humanitario de recuperar los restos de personas para que las familias puedan darles sepultura digna.

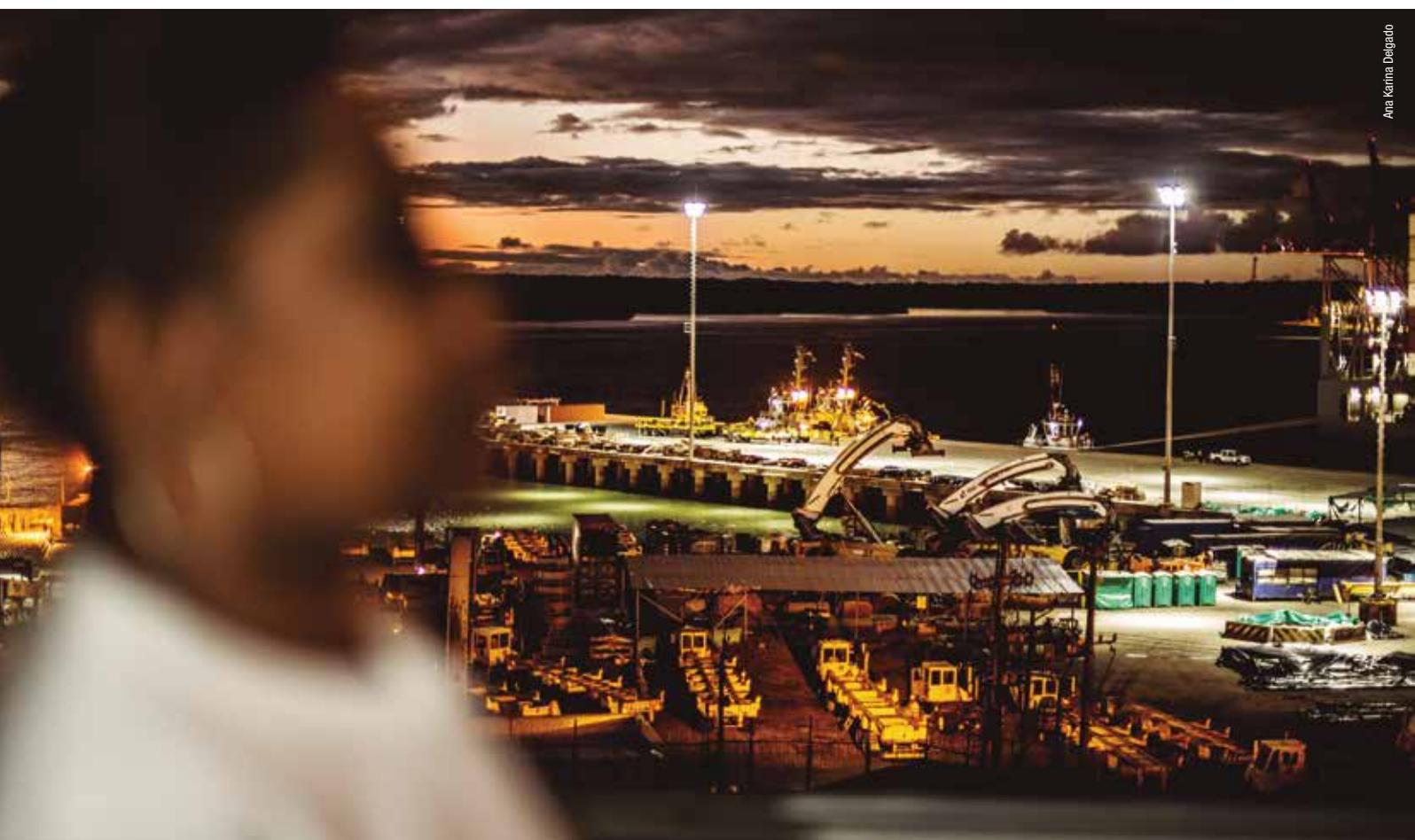


Isabel Ortigosa/CICR

☉ Cementerio de Buenaventura. En la labor de apoyar a los familiares de los desaparecidos, la Cruz Roja Colombiana es un aliado importante del CICR.

El miedo silencia a las víctimas de violencia sexual

Cerca de 17.100 mujeres y niñas han sufrido delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado desde los años 80. Para el CICR, es preocupante la recurrencia de este fenómeno y las carencias en la atención a las víctimas.



Ana Karina Delgado

☉ Según el Registro Único de Víctimas, en 2016 se registraron 153 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y otras situaciones de violencia.

Isabel fue agredida sexualmente por tres hombres armados que hacían presencia en la región montañosa en la que vivía. El temor a que lastimaran a sus hijos, que dormían en la habitación contigua, la obligó a callar sus gritos. Fue golpeada y violentada durante un tiempo que no logra calcular. Unas semanas más tarde, supo que estaba embarazada. Decidió huir, con sus hijos a cuestas. Nunca volvió a su tierra. Nunca habló.

Isabel cargó durante veinte años con el precio del silencio. Nadie conocía su secreto. Sin embargo, hace un año, tras haber sido desplazada de nuevo por

su trabajo como líder comunitaria, decidió por fin compartir su historia con otras mujeres y, finalmente, con su hija, fruto de aquella violación.

“Lo que más me duele es que ella sufre. Ella siente que no vale. Si ni siquiera yo lo asimilo tantos años después, ¿cómo va a asumirlo ella?”, dice Isabel. Pensó en quitarse la vida e intentó abortar, perder a ese hijo que nunca deseó, pero su hija nació. “La adoro, claro, pero a veces es bien terrible mirarla. Me recuerda lo que pasó. Siempre me pregunto cuál de aquellos hombres es su papá”.



Isabel Ontigosa/CICR

El CICR apoya a las víctimas de violencia sexual por medio de atención médica y psicosocial. También tiene proyectos para fortalecerlas económicamente.

Isabel no se llama Isabel. Su nombre podría ser cualquiera. Su historia es la de tantas mujeres, niñas y niños colombianos, violentados física y emocionalmente por los actores del conflicto y la violencia armada. Sus cicatrices, sus cuerpos marcados, su valentía y su capacidad de lucha son parte de la geografía emocional de este país.

Según cifras de la Unidad de Víctimas, entre los años 80 y diciembre de 2016 han sido registradas cerca de 17.100 mujeres y niñas que sufrieron de delitos contra su libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado. El hecho de que se tenga poca documentación de víctimas hombres o personas con otras identidades sexuales no implica que la violencia sexual contra ellos no exista, sino que la invisibilidad del fenómeno es aún mayor (ver gráfico p. 27).

Una muestra de 100 casos recopilados por el CICR en Colombia entre 2014 y 2016 indican que varias de las víctimas atendidas padecieron más de un episodio de violencia sexual en su vida. En un 41 por ciento de los casos hubo más de un perpetrador y fueron comunes las violaciones colectivas cometidas por entre tres y ocho personas.

No es anómalo encontrar a víctimas que refieren que también sus madres, hermanas, hijas o abuelas han sufrido agresiones de este tipo. Es decir, se trata de un fenómeno recurrente y que afecta a varias generaciones dentro de una misma familia, lo que está relacionado con la persistencia del conflicto y la violencia armada en el país.

Entre las víctimas de violencia sexual que se acercaron al CICR, se registró una mayor afectación de las mujeres afrocolombianas y campesinas (40 y 35 por ciento respectivamente).

Lo anterior parece estar relacionado con varios factores concurrentes: el primero, su ubicación geográfica en áreas rurales con escasa presencia estatal; el segundo se refiere al hecho de que en estos mismos territorios se localizan fuentes de riqueza para la financiación de la violencia armada. El interés por manejar estas zonas implica que los actores armados ejercen un férreo control sobre la población. Muchas veces la víctima sigue expuesta a represalias por parte del perpetrador, lo que conlleva a su silencio.



Voces de las víctimas

“Mis hijos me decían: ‘Mami, ¿qué te pasa, por qué estás triste?’ Yo **nunca les conté** lo que me había pasado”.

Arelis*

“Mi mensaje hacia otras mujeres es **que sigan luchando**, que no se dejen vencer, que conozcan sus derechos”.

Miriam*

“Yo **me encerré en la casa**, no le abría la puerta a nadie, no me bañaba. Quedé como mal de la cabeza”.

Julia*

“El uso de la violencia **contra los cuerpos de las mujeres** por parte de grupos armados hace que las comunidades tengan miedo, facilita que ellos regulen la vida cotidiana de las comunidades”.

Ana María*

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las víctimas.

Una de cada cinco víctimas de violencia sexual que atendió el CICR entre 2014 y 2016 presentó un embarazo no deseado.

Todo caso es una urgencia médica

El CICR constató que existe un elevado desconocimiento entre las víctimas sobre el hecho de que todo caso de violencia sexual es una urgencia médica. Por este y otros factores como el miedo o la vergüenza, la mayoría de las personas afectadas y apoyadas por el CICR no se acercó a instituciones de salud tras los hechos (menos de 72 horas).

Una de cada cinco víctimas de violencia sexual que atendió el CICR entre 2014 y 2016 presentó un embarazo no deseado. Con la intención de interrumpir estos embarazos, muchas mujeres recurren a prácticas inseguras para provocar un aborto que pone en riesgo su integridad física. Cuando los niños nacen, el hecho de que muy pocas veces sus madres hayan tenido apoyo psicosocial, unido al estigma y la discriminación, los hace más vulnerables y los expone al abandono y al maltrato.

En algunas ocasiones, el acceso a medios de subsistencia queda vetado por el miedo a tener que caminar por zonas inseguras y a la persecución de los autores de las agresiones. Por eso el apoyo a las víctimas no deber ser solo psicológico y físico, sino también económico. Esto les permite comenzar un nuevo proyecto de vida en un ambiente más seguro.

Faltan garantías

En términos generales, este tipo de violencia constituye un fenómeno que presenta un importante subregistro. Esta falta de información está asociada a dos factores: las escasas denuncias que exis-

ten como consecuencia de la falta de un ambiente protector y confidencial que brinde las garantías suficientes a las víctimas para compartir sus experiencias y buscar apoyo, y un elevado índice de impunidad en materia judicial.

A menudo, a pesar de los esfuerzos, la respuesta humanitaria del Estado presenta todavía carencias y las víctimas se encuentran solas, sin apoyo por parte de su entorno cercano, con el que frecuentemente no comparten su experiencia, ni por parte del aparato estatal. Los sentimientos de miedo, culpa y vergüenza son una constante; las heridas emocionales tardan tanto o más en sanar que las físicas. El tabú que rodea estas agresiones a mujeres, hombres y niños cubre los abusos con un halo de invisibilidad.

Creemos firmemente que la violencia sexual en el marco de los conflictos armados y otras situaciones de violencia puede y debe detenerse. Con una respuesta integral que incluya prevención, protección y asistencia, buscamos garantizar que las necesidades de las víctimas sean atendidas.

El apoyo psicológico que ha recibido Isabel la ha ayudado a superar en parte lo que le ocurrió. Ha perdonado, dice, pero no olvidado. "Todavía me salen lágrimas cuando hablo de esto". Asegura que hablar con otras mujeres que han sufrido violencias similares es sanador: "Yo antes no salía de casa, sentía miedo. Ahora me siento capaz de contarlo, de apoyar a otras mujeres que han pasado por la misma situación".

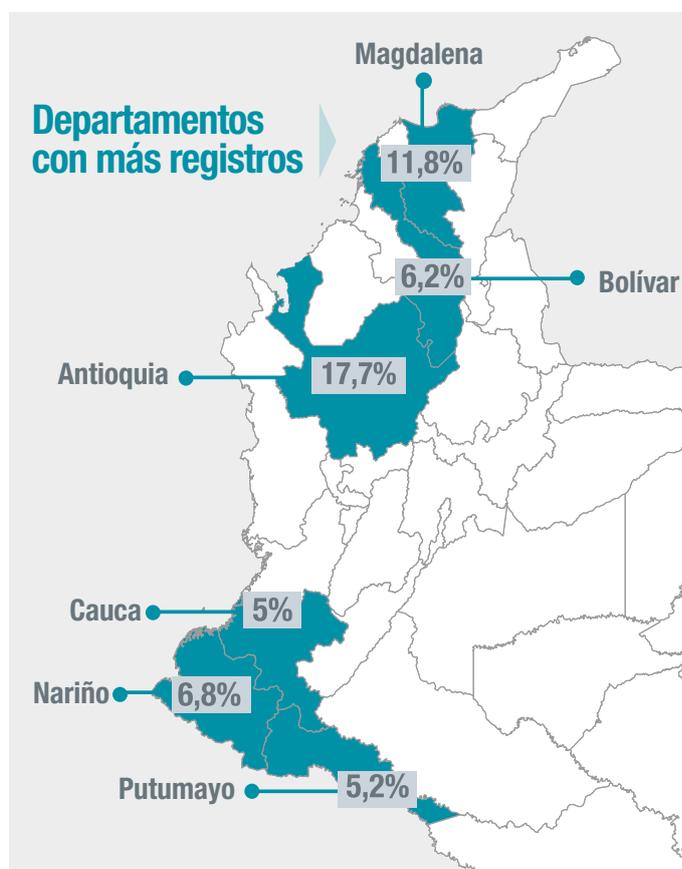
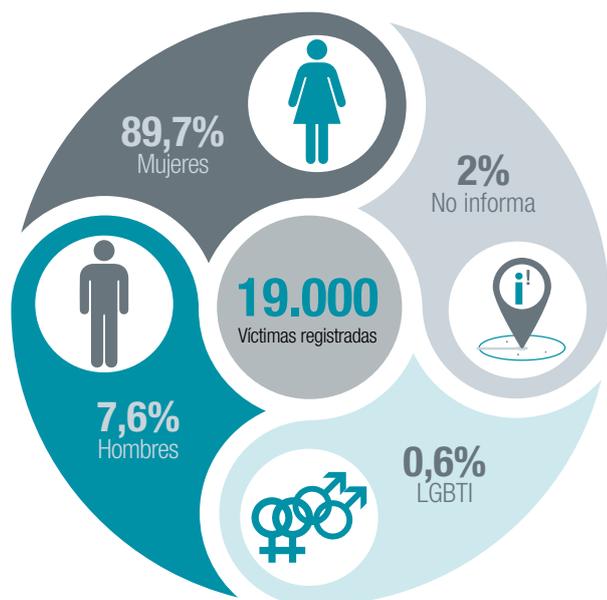


Aira Katrina Delgado

● La violencia sexual presenta un alto subregistro por el miedo o la vergüenza que sienten las víctimas y las deficiencias del aparato judicial para atrapar a los autores de estos delitos.

Radiografía de la VIOLENCIA SEXUAL

Cerca de **19.000** personas han sido registradas por el Estado como víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto y la violencia armada. Sin embargo, el subregistro y el miedo a las represalias mantienen muchas agresiones en el silencio.



Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte al 1ero de enero de 2017.

DESDE EL TERRENO

Secuelas que duran años

No le importó que estuviera embarazada. Quien violó a Fulvia también la golpeó y amenazó. “Si usted habla, yo sé dónde vive su familia”, recuerda que le dijeron. “En el conflicto armado, la violencia sexual se usa como una forma de generar terror. La usan todos los grupos armados”, agrega.

Por más experta que sea en la atención a víctimas, historias como las de Fulvia siempre afectan a Carolina, psicóloga de Cruz Roja Colombiana en Buenaventura, Valle del Cauca. “Nos llegan tantos casos que eso empieza a dejar una huella personal. Duele ver tanto daño, tanta violencia, tanto miedo en niños, en mujeres”, asegura.

La estrategia de atención a víctimas de violencia sexual que implementamos junto con la Cruz Roja Colombiana va más allá de la atención temprana en salud. Abarca también la atención psicosocial, independientemente de que hayan transcurrido años desde la agresión.

“A veces encontramos mujeres que luchan y son líderes, pero su afectación sigue. Pasan los años y cada vez que cuentan su historia siguen reviviendo dolores y tocando fibras emocionales muy sensibles”, dice Carolina.

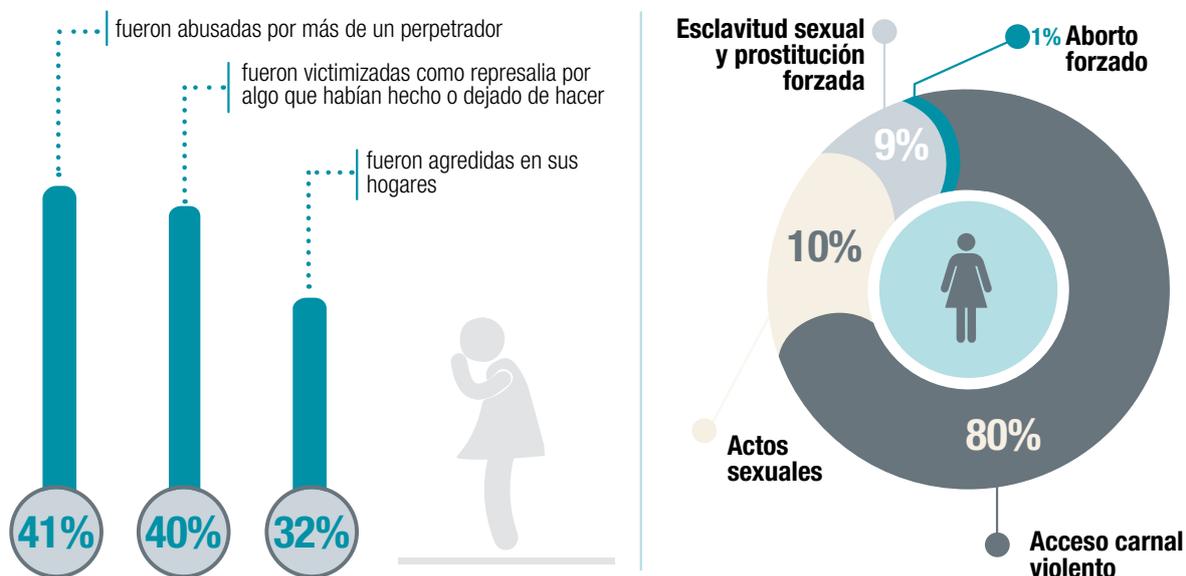


Ana Karina Delgado

© Fulvia es víctima de violencia sexual y se ha convertido en líder de su comunidad.

Tendencias más preocupantes en casos que apoyamos

El CICR siguió de primera mano los casos de 100 víctimas de violencia sexual que recibieron asistencia por parte de la Institución entre 2014 y 2016. Tras un estudio minucioso de los casos, estas fueron las preocupantes tendencias de la muestra.



Fuente: Muestra de 100 víctimas atendidas por el CICR, en cooperación con otras instituciones, entre 2014 y 2016. Estos datos no deben tomarse como el reflejo de una tendencia nacional. Una víctima pudo reportar más de un hecho.

Un canto para sanar

“Es tan vergonzoso el tema de la violencia sexual que los victimarios no lo reconocen. El cuerpo es algo tan personal, tan nuestro, que las mujeres se culpan”, dice María Eugenia Urrutia, fundadora de la Asociación de las Mujeres Afro por la Paz, Afromupaz.

Como consecuencia de una agresión sexual, tuvo que desplazarse de su natal Chocó. Hoy se dedica a ayudar a otras víctimas a través del activismo social

y terapias colectivas que incluyen cantos y tradiciones ancestrales.

Sin embargo, nunca fue fácil para María Eugenia superar su propia historia. Tras la violación, se sumió en el llanto sin salir de su casa y retiró a sus hijos del colegio. “Pero un día empecé a cantar... a recordar los cantos del Chocó. Con los cantos, abrazando a mis hijos, reaccioné. Me di cuenta de que el canto era sanador”, relata.



© Bogotá. Los grupos de mujeres de Afromupaz hacen un recorrido simbólico por lo que ellas llaman “la huerta”. Se cuentan sus historias, cantan y tocan instrumentos.

HECHOS Y CIFRAS

Nuestra acción humanitaria frente a la violencia sexual en Colombia

Junto con la Cruz Roja Colombiana, ofrecemos orientación a las víctimas acerca de las rutas de atención del Estado y las apoyamos cubriendo los gastos de alimentación y transporte cuando necesitan viajar para obtener asistencia médica o psicológica. Esta fue nuestra respuesta en 2016.



Isabel Orjigosa / CICR

Una de las maneras en las que apoyamos a las víctimas de violencia sexual es mostrándoles las rutas de atención estatal que tienen derecho a recibir.

✓ **170** **víctimas** 
están en proceso de sanar el trauma físico y mental tras haber recibido atención médica y psicológica. 26 de ellas eran menores de quince años.

✓ **800** **miembros** 
de la Fuerza Pública asistieron a talleres de prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

✓ **210** **estudiantes** 
de diferentes universidades fueron formados para brindar una orientación y asistencia legal de calidad a las víctimas de violencia sexual.

✓ **100** **funcionarios** 
de la rama judicial fortalecieron sus conocimientos acerca de la aplicación de la normatividad relacionada con la violencia sexual.

Restos explosivos de guerra, un reto para las próximas décadas

La presencia de artefactos explosivos (restos de guerra y otros de fabricación improvisada) cerca de los entornos poblados, además de la proliferación de armas en zonas urbanas, son algunas de las amenazas que enfrenta la población civil en Colombia.



☉ Cauca. Gémeron perdió la mano izquierda tras un accidente con un resto explosivo de guerra. Muchos menores resultan heridos al ir por agua, leña o jugar en el campo.

“Del 100 por ciento de vida que tenía, el 50 me hace falta... ya nada es lo mismo y quedé sufriendo el trauma psicológico, además del físico”, dice Ángel Córdoba, un campesino que vive en Putumayo y que perdió la pierna izquierda tras haber pisado un artefacto explosivo en zona rural de Puerto Asís.

Sus días, que transcurrían entre la siembra de alimentos en una finca y la crianza de sus hijos, cambiaron drásticamente tras el accidente que le hizo imposible volver a alzar bultos o trabajar en el campo.

Para ayudar a Ángel Córdoba a recuperarse, el CICR le brindó ayuda económica con la que pudo acceder a servicios de salud y fortalecer el negocio con el que se sostiene. Es un hombre que no teme llorar cuando cuenta su historia porque las cicatrices físicas son solo una parte de su vida.

Además de la región del sur del país donde vive Ángel, hay otros puntos neurálgicos del conflicto como Cho-

có, Arauca, Nariño, Antioquia, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Córdoba, que durante los últimos años han convivido de manera cotidiana con los actores armados y con un territorio contaminado por restos de guerra, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal.

Cada año se registran nuevos casos. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA) registró 63 heridos y 11 muertos por la detonación de estos artefactos durante 2016. Tres de cada diez personas que perdieron la vida fueron civiles y los otros siete, militares.

Solo en 2016, el CICR trabajó con 23 víctimas directas en zonas pobladas. De ellas, dieciocho se vieron afectadas por accidentes con artefactos explosivos improvisados y cinco por restos explosivos de guerra.

Los técnicos del CICR pudieron observar que en las zonas más afectadas por este fenómeno, los niños te-



Voces de las víctimas

“El artefacto que explotó en mi patio me afectó la rodilla, la mano y la cara. A la gente le da miedo salir por ahí porque lo que yo me encontré estaba cerca a la casa. Imagínese cómo estarán los potreros”.

Raúl, Norte de Santander

“Es duro vivir en pánico porque uno no sabe a qué hora van a venir (los grupos armados) o si dejan algo por ahí”.

Eduardo, Cauca

men ir a la escuela, las familias no pueden acceder a sus cultivos o a fuentes de agua, campesinos arriesgan sus vidas para buscar leña y alimentos, y comunidades confinadas no pueden moverse libremente por su territorio.

En ocasiones, muchos ni siquiera pueden caminar con confianza en el patio de sus propios hogares. En 2016, ese fue el caso de Raúl, quien sufrió heridas en la cara y las manos cuando una granada que había caído en el solar explotó mientras limpiaba la maleza del lugar. Su casa, en Norte de Santander, también tiene las marcas de impactos de bala.

Tras el Acuerdo de Paz, esta problemática es una de las más complejas para el país. En el marco de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP se llegó a un acuerdo sobre desminado humanitario. A enero de 2017, se habían priorizado 207 municipios, 22 de los cuales están en operaciones de desminado. Sin embargo, dada la enorme extensión de terreno afectado por la presencia de estos artefactos, la gran dificultad radica en conocer con certeza dónde están ubicados.

La población civil que vive en estas regiones poco o nada puede hacer para evitar que su día a día se vea condicionado por el temor a la presencia de artefactos explosivos. Las familias desplazadas que retornan a sus tierras lo hacen sin saber si la amenaza ha sido retirada o no. Por todo ello, la mitigación del riesgo resulta clave para evitar accidentes. Durante 2016, el CICR, junto con la Cruz Roja Colombiana, capacitó a 13.600 personas vulnerables para que aprendieran a mantenerse seguras.

Los niños también son víctimas

Gémerson lleva un poco más de un año aprendiendo a vivir sin la mano izquierda. La perdió a inicios de 2015 en el Cauca, luego de recoger una granada del suelo pensando que era un objeto con el que podía jugar.

Las consecuencias de este evento marcaron un antes y un después en la vida del niño. No solo tuvo que enfrentarse a la pérdida de una mano, sino también al rechazo de sus compañeros de colegio. La estigmatización lo afectó tanto que se negó a ir a la escuela durante meses.

El CICR le proporcionó una prótesis y el proceso de rehabilitación física. Además, lo apoyó con actividades que permitieron a sus compañeros de clase ponerse en el lugar de Gémerson y entender las dificultades que implica tener una discapacidad. Según la familia del niño, el apoyo psicológico que recibieron ayudó a que él pudiera hacer frente a su pérdida y evitó que lo siguieran molestando.

Hoy Gémerson es un niño alegre, inquieto, que no se ve a sí mismo como una víctima. “Ya es más activo, ayuda en la siembra, volvió a la escuela y se viste sin ayuda, porque dice que él puede solo”, dice su madre, Viviana.

Durante años, el CICR ha trabajado con las poblaciones más afectadas por esta problemática. Para la Institución seguirá siendo una prioridad acompañar a las familias como la de Gémerson, que han sufrido en carne propia las consecuencias de artefactos explosivos.

En las zonas más afectadas por este fenómeno, los niños temen ir a la escuela y las familias no pueden acceder a sus cultivos o a fuentes de agua.

Víctimas de artefactos explosivos

Víctimas directas entre

1990 y 2016  11.400



39%
son civiles

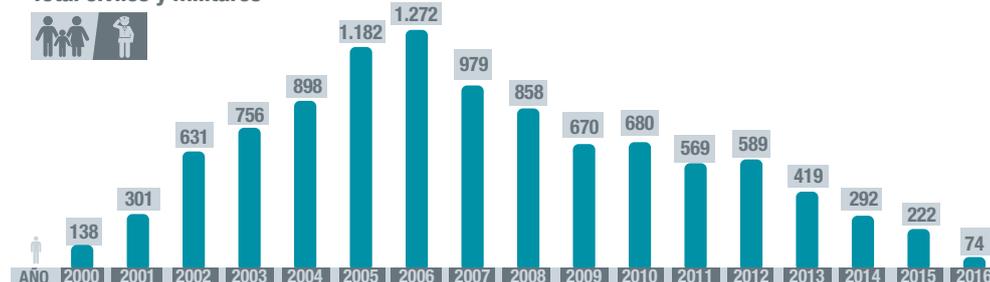
Panorama de las víctimas **civiles**

19%
Falleció

81%
Sobrevivió

26%
Tenía menos de 18 años en el momento del accidente

Total civiles y militares



Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA). Datos con corte al 31 de diciembre de 2016.

Las balas perdidas son una amenaza constante

Astrid es una de las más de 100.000 habitantes de la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia. Allí, la violencia desbordada entre diferentes actores armados ha provocado que las zonas pobladas se vean afectadas por el fuego cruzado.

A raíz de un enfrentamiento a mediados de 2016 en el casco urbano de San Calixto, esta joven de 22 años resultó herida en una de sus piernas, lo que ha dificultado su vida diaria. Ya no puede moverse como antes y tuvo que dejar de practicar deporte en el colegio por el dolor que le causa correr. "Cada vez que hay enfrentamientos, las balas llegan a mi barrio y tenemos que escondernos", dice Astrid.

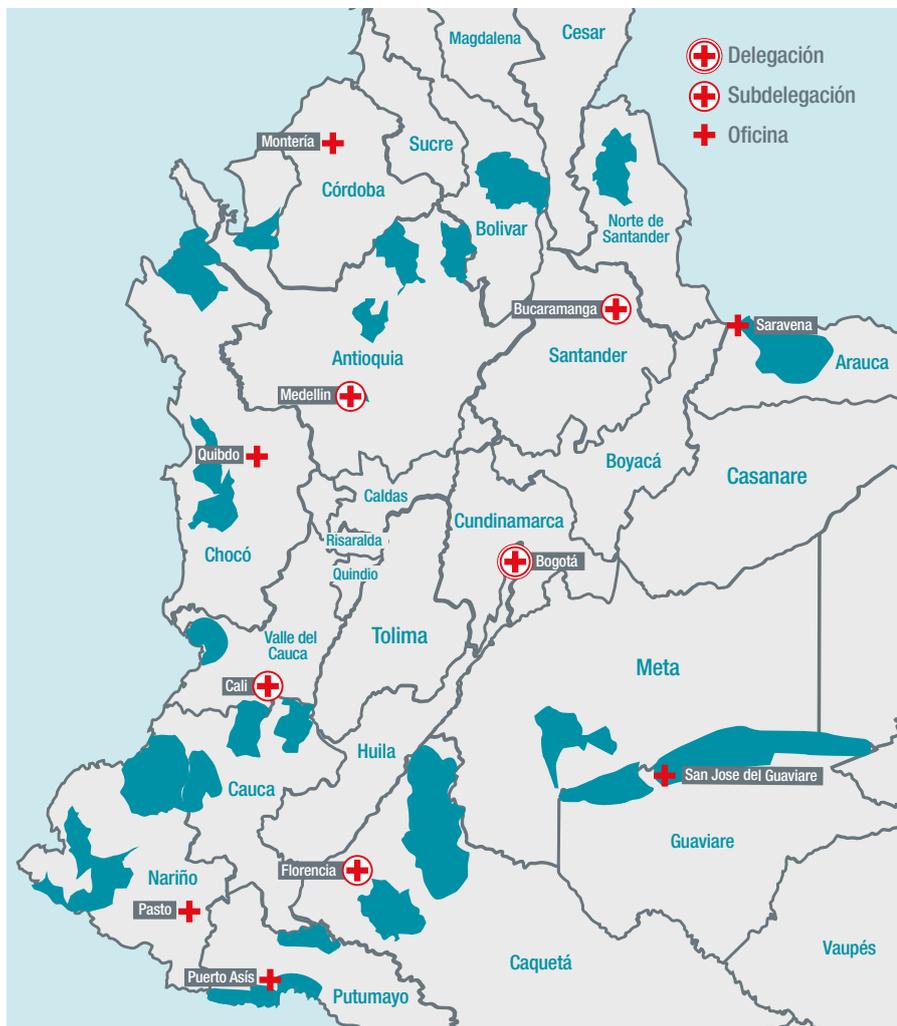
El CICR observa con preocupación que en muchas zonas del país la población civil se ve expuesta a la proliferación de armas y sus municiones, lo que afectan su cotidianidad.

Este fenómeno no es solo propio de zonas pobladas aisladas, sino también de algunas ciudades principales, donde la violencia limita la vida de personas que viven confinadas y sin poder moverse libremente. Este miedo también afecta psicológicamente a niños y adultos.



Así han quedado algunas viviendas en el Catatumbo, N. de Santander, por impactos de balas perdidas.

Zonas en las que el CICR realiza actividades para mitigar el riesgo



Cocinas seguras en Nariño



Aura Marina cocina en la estufa ahorradora de leña que recibió por parte del CICR.

Desde hace dieciséis años, Aura Marina vive junto a su familia en zona rural de Nariño, donde ha tenido que aprender a sobrellevar la zozobra que produce estar en medio del conflicto.

Allí, el gas propano es económicamente inaccesible para la mayoría de la población. Además, salir a recoger leña para poder cocinar es una tarea complicada, pues los habitantes de la región no solo deben estar atentos al fuego cruzado, sino también de caminar por las rutas conocidas para evitar convertirse en víctimas de artefactos explosivos. "Ya nos adaptamos. ¿Qué más podemos hacer?", dice Aura.

En 2016, ella y otras 70 personas recibieron una estufa ahorradora gracias al CICR. Con una pequeña cantidad de madera es posible cocinar por varios días. Esto evita que se vean expuestos a accidentes al caminar en zonas no seguras.

HECHOS Y CIFRAS

Nuestra respuesta frente a esta problemática humanitaria

En 2016, de la mano de la Cruz Roja Colombiana, continuó nuestro trabajo para prevenir accidentes y reducir el riesgo que enfrentan comunidades enteras.



☉ Norte de Santander. Raúl camina por el solar de su casa, donde sufrió un accidente con una granada sin explotar.

¿A qué llamamos “contaminación por armas”?



El fenómeno de la contaminación por armas, aunque usualmente es asociado a las minas antipersonal, es mucho más amplio: implica también la presencia de restos explosivos de guerra, granadas, armas pequeñas, proyectiles o morteros lanzados o abandonados y que no llegaron a explotar.

Los accidentes con estos artefactos suelen ocurrir dentro o fuera de una zona poblada y también son resultado de la violencia armada.

En Colombia lo más frecuente es la presencia de explosivos fabricados de forma improvisada que se activan de la misma manera que una mina antipersonal, las que son solo de fabricación industrial. Por eso, cuando en el país se habla de “minas”, en realidad se está haciendo referencia a artefactos explosivos improvisados.

✓ **13.600** personas

que viven en zonas afectadas por artefactos explosivos aprendieron cómo mantenerse seguros.

✓ **2.800** habitantes

de áreas contaminadas cuentan con un mejor acceso al agua, saneamiento básico e infraestructuras escolares renovadas.

✓ **208** víctimas

de artefactos explosivos recibieron ayuda económica.

✓ **101** víctimas

de contaminación por armas se movilizan mejor tras haber recibido rehabilitación física, prótesis u otros aparatos ortopédicos.

✓ **9** personas

que fallecieron en accidentes con restos explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados tuvieron un funeral digno.



Recolección de información:

El CICR sigue siendo el principal proveedor de información sobre víctimas de contaminación por armas de casos antiguos y recientes para la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA). Esta información se utiliza para garantizar la atención de las víctimas y su acceso a la reparación que tienen derecho a recibir.

Urgen cambios drásticos en la política criminal colombiana

La crisis carcelaria en Colombia va mucho más allá del hacinamiento y de las pésimas condiciones que genera para los privados de libertad. En realidad, el país enfrenta otros grandes retos en el abordaje de la sobrepoblación de internos y el diseño de su legislación.



☉ Tras décadas de visitar las cárceles, el CICR lamenta la falta de programas que prevengan los delitos y reintegren al detenido en la sociedad.

Durante meses, cuando la lluvia caía sobre el patio 9 de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, mojaba todas las pertenencias de las internas, especialmente sus colchones y colchonetas. Esto afectaba especialmente a las que duermen en el suelo o “la carretera”, como ellas lo llaman.

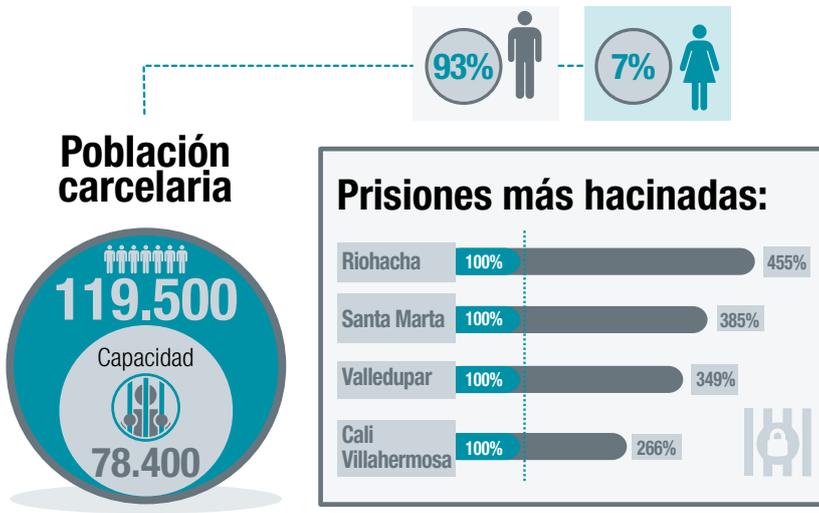
En 2016, este fue uno de los patios a los que el CICR llevó proyectos de impermeabilización de los techos, con los que se mejoró la calidad de vida de las reclusas. No obstante, el patio 9 es solo un ejemplo; en este y en otros centros de reclusión hay sectores con problemas de filtración, higiene y mala calidad del agua. El estado de los baños y duchas es crítico por la antigüedad de las instalaciones y el número de internas.

Esta es solo una muestra de cómo la falta de coherencia en la política criminal impacta drásticamente en la política penitenciaria. Del año 2000 hasta enero de 2017 el número de detenidos en Colombia pasó de 51.500 a 119.500, y el hacinamiento creció de un 35,7 por ciento a un 52,5 por ciento.

Además, la falta de personal y, en su mayor parte, una infraestructura obsoleta, sumado a las condiciones indignas de detención, impactan negativamente el proceso de reinserción social.

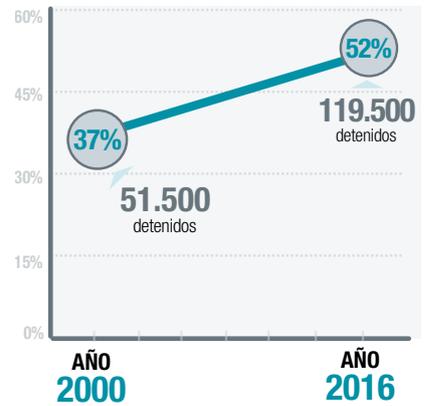
El hacinamiento, la falta de higiene y una deficiente atención médica fomentan la rápida propagación de enfermedades como varicela y tuberculosis, y otras de transmisión sexual como hepatitis B y VIH/SIDA.

Altos niveles de hacinamiento



Fuentes: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Datos actualizados al 14 de febrero de 2016. Análisis sobre el actual hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia (Defensoría del Pueblo, 2016)

NIVEL DE HACINAMIENTO Aumento en dieciséis años



Asimismo, los internos afectados por algún tipo de enfermedad mental no están separados en pabellones especiales. Esto no solo afecta el desarrollo de su enfermedad, sino que también los expone a ser atacados por otros reclusos o incluso facilita que lleguen a hacerse daño.

En Colombia, el Estado no cumple con sus obligaciones frente a las personas que castiga por violar la ley. La Corte Constitucional ha reconocido las falencias del sistema carcelario colombiano en su jurisprudencia (Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015), en la que manifiesta la urgente necesidad de un cambio en la política carcelaria, actualmente orientada a endurecer las penas, a pesar de no poder atender adecuadamente las necesidades de los internos a corto ni largo plazo.

Priorizar la reinserción

¿Es la construcción de más establecimientos carcelarios la solución al problema? Actualmente existen unos 119.500 internos (cerca de 40.000 personas más de lo que permite la capacidad carcelaria), lo que ubica a Colombia como el segundo país con más población detenida en Suramérica después de Brasil (622.000), según informes del Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR, por su sigla en inglés).

Un 30 por ciento de estas personas ni siquiera ha sido condenada, sino que se encuentra en detención preventiva a la espera de que se defina su situación jurídica. El Estado tiene que preguntarse qué personas y qué tipo de delitos merecen penas de privación de la libertad y cuáles no. Algunas personas no deberían estar detenidas, no porque sean inocentes, sino porque podrían pagar su condena de otras formas. Aunque la legislación colombiana contempla penas alternativas, rara vez se aplican.

Para el CICR, la respuesta a la crisis implica un rediseño de la política criminal en el que se priorice la prevención y la reinserción, y que no privilegie la detención preventiva en establecimientos carcelarios como la única medida contra la inseguridad ciudadana.

Muy pocos internos tienen garantizados los programas para su efectiva resocialización y reintegración. Según cifras del INPEC de diciembre de 2016, en las cárceles del país hay cerca de 18.700 detenidos que reincidieron en los delitos.

El problema carcelario no depende de una entidad en particular. Es una tarea de la que se debe encargar todo el Estado. Si bien es importante solucionar las consecuencias del hacinamiento, también es urgente abordar las causas de una crisis que cada año adquiere dimensiones insostenibles que comprometen el respeto a la dignidad humana. Sin duda, es tiempo de buscar resultados concretos e implementar una política criminal coherente.



Voces desde las prisiones

“Hay gente que se merece la oportunidad de pagar su condena por medio de trabajo porque en la cárcel hay personas que se dañan mucho más que en la calle”.

Tyson

“El mismo hacinamiento no permite la clasificación de la que habla el código carcelario, que dice que debemos ser ubicadas en los patios según nuestra condición. Eso aquí no existe”.

Yazmín

“Luché un poco para manejar la prótesis con la muleta pero ya puedo caminar otra vez. El hacinamiento es lo más difícil de vivir en la cárcel con discapacidad”.

José

DESDE LAS CÁRCELES

Hijos quedan sin rumbo

Dejar solos a sus tres hijos marcó a Gloria para siempre. Cuando fue detenida, dos de sus hijos fueron acogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El único apoyo que tuvo no vino de su familia, sino de una persona que conocía bien su situación: una de las internas que había logrado salir y que se propuso sacar a los hijos de Gloria de la situación en la que estaban. Ahora, ellos son su único soporte, los únicos que la esperan mientras sale de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor.

Gloria llegó a esa cárcel hace casi seis años. Empezó a trabajar para rebajar su condena. Ahora, sus días están dedicados a tareas como llamar a otras internas en caso de que sean requeridas por los servicios judiciales y a realizar algunas labores de aseo. Así ha logrado descontar casi un año de su pena.

“Quiero salir de aquí, trabajar la bisutería y tener una microempresa al estilo de una fundación para que mucha gente aprenda y pueda sobresalir. Esos son sueños, ojalá se cumplan”, dice Gloria, quien deberá esperar a que un juez determine si cumple con los requisitos para obtener beneficios y quedar en libertad.



Tomás Méndez

☉ Gloria afirma que a las internas les hace falta ayuda para recuperar los lazos con sus hijos mientras se encuentran detenidas.



HECHOS Y CIFRAS

Nuestro trabajo en las prisiones

Continuamos con la labor humanitaria que iniciamos hace más de cuatro décadas: visitar las prisiones para llamar la atención a las autoridades sobre las condiciones de las personas detenidas y proponer soluciones alternativas para resolver los problemas estructurales de raíz.



Juan Sebastián González/ OICR

● Cali. Para los detenidos con algún tipo de discapacidad, el desafío es doble a la hora de moverse en medio de condiciones de hacinamiento.

✓ **64.000** detenidos 

se beneficiaron de las visitas que realizamos en diecisiete prisiones del país, en las que observamos sus condiciones de detención y respeto de sus garantías judiciales.

✓ **270** funcionarios 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fueron capacitados en estándares internacionales sobre trato digno de los detenidos (Las Reglas Mandela).

✓ **17.500** detenidos 

han podido conocer más sobre sus derechos gracias a la distribución de cartillas explicativas realizadas por la Universidad de los Andes con apoyo del CICR.

✓ **7.700** personas 

privados de la libertad se beneficiaron de adecuaciones en sus patios gracias a seis proyectos de agua y saneamiento realizados en centros de detención en Boyacá, Bogotá, Valle del Cauca y Chocó.

✓ **80** personas 

detenidas en condición de discapacidad ahora cuentan con prótesis nuevas y, en algunos casos, con terapias de rehabilitación física. Además, en la cárcel Villahermosa de Cali y La Picota de Bogotá se mejoraron los accesos para facilitar la movilidad de los internos con discapacidad.

✓ **30** menores de edad 

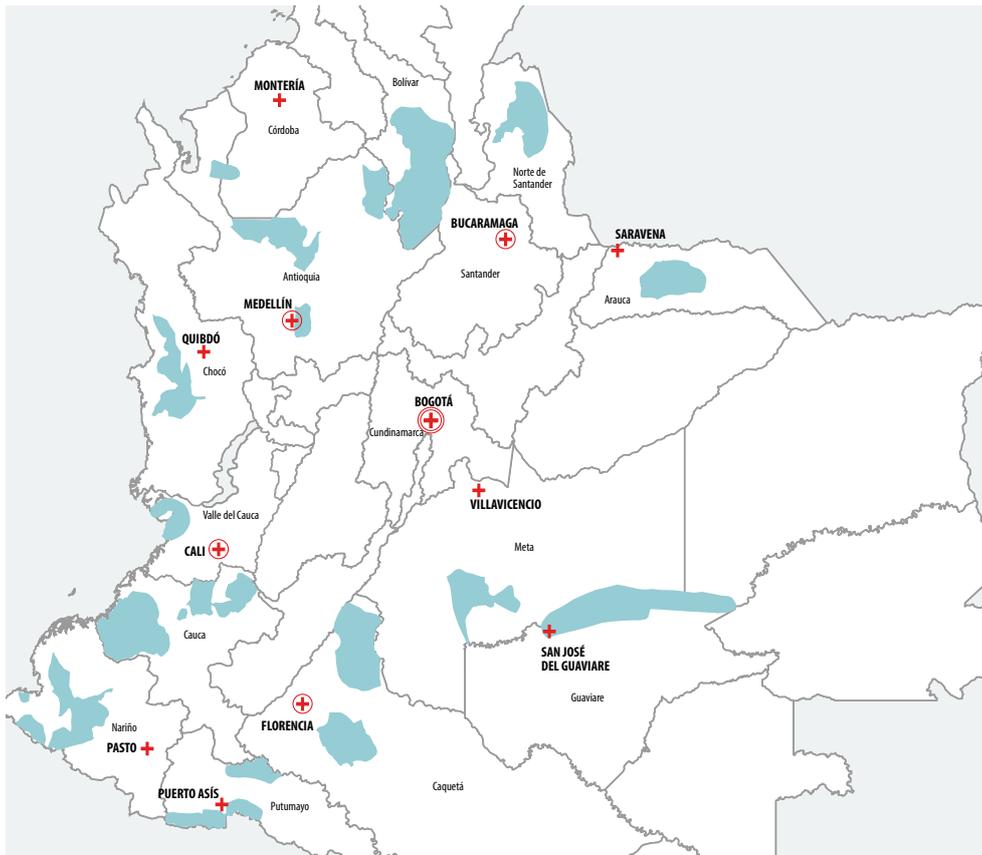
privados de la libertad pudieron reencontrarse con sus familiares, los cuales no habían podido visitar por falta de recursos.



● Alto Baudó, Chocó.

¿DÓNDE ESTAMOS?

El CICR cuenta con doce oficinas operativas en Colombia.



SEDE PRINCIPAL EN COLOMBIA - BOGOTÁ D.C.

Calle 76 # 10 - 02
 (571) 313 86 30 Fax: (571) 312 82 82
www.icrc.org/co
bog_bogota@icrc.org
 ICRCespanol
 @CICR_co



CICR

LEYENDA

- + Delegación
- + Subdelegación
- + Oficina
- Zonas donde el CICR concentra sus actividades

+ **SUBDELEGACIÓN CALI**
 Carrera 29 # 5 B - 31
 Tel: (0*2) 555 66 66
cal_cali@icrc.org

+ **Oficina Pasto (Nariño)**
 Carrera 35 A # 18 - 57
 Tel: (0*2) 731 16 66
pas_pasto@icrc.org

+ **SUBDELEGACIÓN MEDELLÍN**
 Circular 4 # 71 - 91
 Tel: (0*4) 416 20 10
mee_medellin@icrc.org

+ **Oficina Montería (Córdoba)**
 Carrera 6 # 60 - 38 P. 2°
 Tel: (0*4) 785 66 33
moe_monteria@icrc.org

+ **Oficina Quibdó (Chocó)**
 Carrera 3 # 30 - 43
 Tel: (0*4) 672 23 43
qub_quibdo@icrc.org

+ **SUBDELEGACIÓN FLORENCIA**
 Carrera 7 # 16-20
 Tel: (0*8) 435 41 59
flo_florencia@icrc.org

+ **Oficina Puerto Asís (Putumayo)**
 Calle 10 # 24 - 22
 Tel: (0*8) 422 72 54
pua_puertoasis@icrc.org

+ **SUBDELEGACIÓN BUCARAMANGA**
 Calle 52 A # 31 - 70
 Tel: (0*7) 657 75 42
bua_bucaramanga@icrc.org

+ **Oficina Saravena (Arauca)**
 Calle 26 # 11 - 07
 Tel: (0*7) 889 18 09
saa_saravena@icrc.org

+ **Oficina San José del Guaviare (Guaviare)**
 Carrera 24 B # 10 - 50
 Tel: (0*8) 584 19 74
sao_sanjosedelguaviare@icrc.org

+ **Oficina Villavicencio (Meta)**
 Carrera 30 # 39-30 Ofc. 401
 Tel: (0*8) 662 38 01
vil_villavicencio@icrc.org

MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. Asimismo, el CICR se esfuerza por prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.

